

AGUA LIMPIA Y PARA TODOS, UN PRIVILEGIO DE CLASE
DANTE MONTAÑO

CHAPULINEO POLÍTICO Y ORGANIZACIÓN POPULAR
ROGELIO GARCÍA MACEDONIO

f Buzos de la Noticia x @buzosnoticias

REVISTA
DE ANÁLISIS
POLÍTICO **buzos**
DE LA NOTICIA

CRISIS POLÍTICA EN ESPAÑA ^{POR EL} MONOPOLIO DE LA VIVIENDA

HACIA LA HUELGA GENE
BAJADA DEL ALQUILER 50% - EXPROPIACIÓN FONDOS BUITRE - CONTRATOS II

Año 26 No. 1260

Revista semanal 19/10/26 \$25.00





Gobierno de
Ocoyucan
2024-2027

Ampliación de red eléctrica

Calle Tomonloc, San Bernabé Temixtlitla



Ampliación de red eléctrica

Calle Atlixco, Santa María Malacatepec



Pavimento con concreto hidráulico

Calle Zaragoza, San Bernardino Chalchihuapán



Ampliación de red agua potable

Calle Corona, Santa María Malacatepec



¡PROMESAS QUE SE CUMPLEN!

Inauguramos obras en todo el municipio

Red de agua potable y drenaje sanitario

Privada Atlixco, San Bernabé Temixtlitla



Red de distribución de agua potable

Colonia Tlacaelel



Instalación de luminarias

Camino a Atlixco, Cerro de Colzingo



Pavimentación con carpeta asfáltica

Prolongación Benito Juárez, Santa Clara



Gobierno de Ocoyucan

ESPAÑA: CRISIS INMOBILIARIA, CRISIS POLÍTICA

El Reporte Especial habla esta semana de la crisis política por la que atraviesa España como efecto de la extrema concentración inmobiliaria en manos de una oligarquía que acapara el 90 por ciento de las viviendas en regulares condiciones; son rentistas de casas, departamentos, locales y hasta de una pequeña habitación que cobran altos alquileres, los aumentan constantemente y presionan a los usuarios amenazándolos con el desalojo.

Hace años que España sufre esta crisis inmobiliaria, propia de los países capitalistas donde la concentración de la riqueza acrecienta aceleradamente el número de pobres, les impide contar con una vivienda digna, los obliga a pagar una renta o los echa a la calle.

La agudización de este problema es lo que se llama crisis de la vivienda y su característica principal es el aumento acelerado de familias sin vivienda propia, que viven hacinadas, pagan exorbitantes rentas y padecen innumerables carencias. En México y otros países de América es bien conocido el fenómeno y se encamina hacia su nivel más extremo; pero España parece haber arribado a lo peor, porque los rentistas, las inmobiliarias, los fondos de inversión extranjera han hecho crecer el número de desahuciados, es decir, desalojados, lanzados a la calle y conducidos a la desesperación y al suicidio. Los buitres de la vivienda han presionado al gobierno de Pedro Sánchez para que siga una política favorable a sus intereses; el gobierno les ha permitido ensañarse con sus inquilinos, que la policía efectúe desalojos, como el de María del Carmen Abascal Martín, a quien el desahucio condujo a la muerte; pero los rentistas quieren más y su presión ha conseguido que el presidente adelante las elecciones para el mes de noviembre.

La derecha y sus partidarios se frotan las manos porque esperan triunfar en el próximo proceso electoral en el que con seguridad empeoraría la situación extrema de los pobres y la crisis inmobiliaria se agravaría aún más.

La crítica situación política de España tiene otro elemento: miles de ciudadanos han tomado las calles para condenar el desalojo de María del Carmen, para manifestar su repudio a la política de apoyo a los *fondos buitre* y para exigir freno a esta voracidad.

Esta situación, dice nuestro Reporte Especial, coloca a España entre los países con más pobreza de Europa. **■**

A FONDO

- 1 España: crisis inmobiliaria, crisis política

ENTREVISTA

- 10 En riesgo, las conquistas sociales logradas en Brasil durante el gobierno de *Lula*. El avance de la derecha en Brasil, una amenaza para Latinoamérica
Francis Martínez Mateo

REPORTAJES

- 16 Desabasto de medicamentos en Durango, un colapso estructural
José Emilio Soto
- 22 BCS: una década de proyectos y promesas para garantizar electricidad
Rocío Casas
- 28 El cierre de AHMSA en Monclova, mineros en el abandono
Ana Velia Maldonado Ramos

OPINIÓN

- 34 Gobierno del pueblo
Brasil Acosta Peña
- 36 Chapulineo político y organización popular
Rogelio García Macedonio
- 38 Acerca del conflicto en Volkswagen
Everardo Lara
- 40 La historia: un puente hacia la paz, no un instrumento de odio
Abolfazl Pasandideh

COLUMNAS

- 42 Ordenar la ciudad a costa del patrimonio social
Miguel Ángel Casique Olivos
- 43 El penoso ingreso de los hogares
Capitán Nemo
- 44 Agua limpia y para todos, un privilegio de clase
Dante Montaña
- 46 Gravar la riqueza en un país desigual
Samira Sánchez
- 47 Clase y lucha de clases
Miguel Alejandro Pérez

CIENCIA

- 48 El *software* privativo se verá superado
Alexis Heras



DEPORTES

- 49 El deporte en México: diagnósticos ambiciosos, soluciones incompletas
Wuenceslao Pérez Caballero

CULTURA

- 50 ¿Materialismo o idealismo?
Jenny Acosta
- 51 *Dos mujeres*
Cousteau
- 53 *Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero*
Tania Zapata Ortega

POESÍA

- 54 La poesía china de la dinastía Zhou



UN MAR DE LIBROS

- 52 *Guillermo Tell*, de Friedrich Schiller
Luis Miguel López Alanís



HUMOR

- 56 Sociedad Anónima

DIRECTORIO

Director General
Pedro Pablo Zapata Baqueiro

Director Editorial
Trinidad González Torres

Director Operativo
Oscar Esteban Casillas

Consejo Editorial
Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas
Martín Morales Silva
Nydia Egremy

Opinión
Brasil Acosta Peña
Rogelio García Macedonio
Everardo Lara
Abolfazl Pasandideh

Columnistas
Miguel Ángel Casique Olivos
Capitán Nemo
Dante Montaña
Samira Sánchez
Miguel Alejandro Pérez
Alexis Heras
Wenceslao Pérez Caballero
Jenny Acosta
Cousteau
Tania Zapata Ortega
Luis Miguel López Alanís

Reporteros
Nydia Egremy
Francis Martínez Mateo
José Emilio Soto
Rocio Casas
Ana Velia Maldonado Ramos

Corrección de estilo
Tania Zapata Ortega
Sergio Rojas Ramírez

Diseño
Daniel David Somohano Rodas
Delmira Molina Guevara

Fotografía
Cuartoscuro
cortesías EFE

Ilustración
Carlos Adrián Mejía Soto

Revista de análisis político
buzos de la noticia.
Edición semanal
del 19 al 25 de octubre de 2026
No. 1260

Editora responsable:
Tania Zapata Ortega
Número de Certificado de
Reserva otorgado por el Instituto
Nacional del Derecho de Autor:
04-2023-020910281100-102. D. R. ©
Número de Certificado
de Licitud de Título
y Contenido: 17286.
Domicilio de la publicación:
Raúl Salinas Lozano #174,
col. Adolfo López Mateos,
Venustiano Carranza,
Ciudad de México,
C.P. 15670

Tel/Fax: 55 6387 1021. E-mail:
direceditorial@yahoo.com.mx

Se imprime en

ESTÉNTOR EDITORIAL,
Azucena del Valle S/N. Colonia
San Buenaventura. Ixtapaluca,
Estado de México, C.P. 56530.

Distribuidor: Rogelio García
Macedonio. Calle Raúl Salinas
Lozano #174, col. Adolfo López
Mateos, Venustiano Carranza,
Ciudad de México, C.P. 15670

Las opiniones vertidas
en las colaboraciones son
responsabilidad de sus autores.



Mole Margarita

El sabor
que reúne a la
Familia.



Productos Margarita Gourmet

REPORTES ESPECIALES

4

Nydia Egremy
X @NydiaEgremy_



ÉLITES CAUSAN TORMENTA POLÍTICA EN ESPAÑA POR DESAHUCIOS

La especulación inmobiliaria lanza a la calle a miles de nuevos indignados que rechazan el poder de rentistas y *fondos buitres* sobre sus vidas. Presionado, el presidente de Gobierno Pedro Sánchez adelantó elecciones que la derecha espera ganar.





Con alarde de fuerza, el 23 de septiembre, la Policía desahució a María del Carmen Abascal Martín, de 87 años. En repudio a esa política de bufetes y fondos de inversión, vecinos y activistas tomaron las calles y, como medida de auxilio, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y aliados emitieron dos decretos, que la oposición de derecha rechazó.

La tensión escaló hasta derivar en crisis política, cuyo eje constituye la denuncia popular contra el lucro de élites locales y fondos extranjeros sobre la vivienda urbana y rural. El siete de octubre, la situación se nubló más con la muerte de Maricarmen, pues la movilización popular llama al paro el 11 de noviembre.

Entretanto, Pedro Sánchez y el Movimiento Sumar sustentan su campaña en denuncias contra la desigualdad agudizada por los grandes *tenedores de vivienda* y “élites económico-sociales que quieren controlar al país”

en espera de la elección adelantada, prevista para el 29 de noviembre.

El caso Maricarmen exhibió dos ejes de la cuestión. Uno, que en el mundo existen entre tres mil y tres mil 500 millones de personas sin vivienda digna y que más de 300 millones viven en la calle, según ONU-Hábitat. El otro, que en España hay entre 28 mil 552 y 42 mil 300 personas sin hogar y se alojan en albergues, según la firma Provivienda.

El desahucio de Maricarmen, por no pagar la altísima renta impuesta por la empresa propietaria del inmueble, también reveló la oscura operación de rentistas, bufetes, empresas, *fondos buitres* y financieras que viven de las rentas de los más pobres.

Las víctimas retratan así la situación: “vivir de alquiler nos obliga a aceptar la extorsión de que un techo valga lo dispuesto por el mercado; significa estar a expensas de las alzas de acuerdo al arrendador”, escribe el periodista Enrique Aparicio.

“El derecho a una casa digna no sólo consiste en una vivienda donde quepan

unos pocos muebles y entre la luz del Sol; también es aquella que se habita sin asfixias económicas y sin el atronador *tictac* de no saber en qué momento te van a echar”, agrega el periodista.

Bajo la mirada marxista, ese capitalismo rentista monopoliza el acceso a cualquier propiedad, a cambio de una suma significativa, sin contribuir a la sociedad. Esa práctica se asocia con la usura y ahora cobra vigencia porque esos rentistas se benefician más por el déficit de vivienda.

El mercado inmobiliario español —rentistas y empresas— opera bajo la hipótesis de que en cada casa ingresan dos salarios cuando menos. Esa perspectiva no aplica para pensionados, mujeres u hombres adultos solos con hijos, que con un solo sueldo pagan alquileres que suben constantemente; lo que reduce la posibilidad de pago y aumenta el riesgo del desahucio.

Crisis estructural

Hoy, todos admiten que la crisis de vivienda en España es estructural. Los

REPORTE ESPECIAL

Nydia Egremy
X @NydiaEgremy_

7

españoles adultos y jóvenes que rentan vivienda, aparecen como las víctimas principales de la especulación del sector.

Los rentistas —oligarquía cuyos ingresos regulares provienen del alquiler de viviendas o locales— acaparan el 90 por ciento de las viviendas regulares en el país. Con las inmobiliarias, rentan casas, departamentos y habitaciones cuya renta suben a capricho o amenazan con desalojarlos.

A la par, esos rentistas se benefician, entre otras medidas, de recursos que el gobierno central transfiere a los gobiernos autonómicos para construir vivienda pública. Es usual que estos propietarios traduzcan tales recursos en adquirir pisos de lujo para uso doméstico o turístico.

Las élites locales y fondos de inversión extranjeros poseen viviendas en zonas privilegiadas, por lo que influyen en la determinación de las rentas que cada vez son más altas. Ello sucede en todas las ciudades españolas, mientras los acaparadores exigen al gobierno mayor protección contra la “ocupación” de los pobres (*los okupas*) para sus pisos.

Es obvio que choquen los intereses de las élites contra los de la población pobre; se estima que en España existe una tasa de pobreza de 25.7 por ciento, lo equivalente a unos 12.6 millones de personas.

Eso convierte a ese país en el quinto con mayor exclusión social entre los 27 miembros de la Unión Europea (UE). Y hay más cifras alarmantes: en España, la pobreza monetaria —si los ingresos de un hogar son inferiores al 60 por ciento del promedio de ingresos— alcanzó 19.5 por ciento, casi a 9.6 millones de personas.

El 16° informe de la plataforma Red Europea contra la Pobreza reveló que, entre 2008 y 2025, España atestiguó una profunda reconfiguración social, como fruto de la superposición de múltiples crisis de distinta naturaleza.

Ello dio por resultado el agotamiento de su modelo económico basado en el

Decretos operativos

El seis de octubre, tras la histórica movilización contra los desahucios abusivos, el Gobierno de Pedro Sánchez y el movimiento Sumar lograron que el Consejo de Ministros hiciera operativos **dos Reales Decretos Ley de Vivienda** que beneficiarán a 1.37 millones de inquilinos cuyos contratos vencen entre 2026 y 2028.

1 Reivindica el anhelo socialista de una prórroga de dos años para contratos de renta que caduquen al 31/dic./2028

+5 millones de personas beneficiadas

- Incluye protección contra desahucios hasta 2030
- Prohíbe hasta 2028 la compra de inmuebles por *fondos buitres*
- Regula intereses de temporada y habitaciones de uso turístico

Incluye dos medidas:

- Sanción a departamentos turísticos ilegales
- Congela al 0% alquileres que superen los índices de vivienda.

La reforma a la Ley Suelo, que se basa en la Ley Antiestafas Inquilinaria, está estancada en el Congreso.

2 La renovación automática de los contratos de alquiler

5 años para personas físicas 7 años para personas jurídicas

Por 8ª vez en la historia, las élites del **PP**, **Vox** y **Junts** votaron al alimón contra los decretos sobre

hicieron lo mismo en:

541 Fondos de Inversión y entidades financieras, aunque el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ordenó que se acepte esa prórroga



crecimiento, en la precarización del mercado laboral y en el endeudamiento. Debido a ello, la pobreza, exclusión y desigualdad ilustran que la capacidad del modelo actual “ha tocado fondo”.

La EAPN vaticina que en España continuará la “carencia material severa” —privación y falta de acceso a recursos cotidianos y básicos— que se sitúa en 8.1 por ciento (unos cuatro millones de personas).

Además, estima en 11.6 por ciento a los trabajadores que viven en el umbral de la pobreza. En ese escenario de precarización, resulta casi imposible que las mayorías imaginen una alternativa residencial adecuada y digna. De ahí la vulnerabilidad habitacional para miles.

Buitres contra españoles

En 2021, una solicitud periodística requirió los nombres de los titulares de más de 10 viviendas de alquiler inscritos en el Institut Català del Sol; pero se le restringió el acceso porque el Tribunal Supremo favoreció el secretismo por “seguridad”.

Desde entonces escaló el descontento por la sentencia que avaló el anonimato de esas firmas, conocidas como “grandes tenedores” (o *fondos buitres*) y opacó la transparencia exigida por los ciudadanos que les alquilan su vivienda.

Uno de esos acaparadores es el fondo de inversión Urbagesión Desarrollo e Inversión S.L (Urbagesa), que compró el edificio donde vivía Maricarmen,

REPORTES ESPECIALES

8 Nydia Egremy
X @NydiaEgremy_

triplicó el precio de su alquiler y, como ella fue incapaz de pagarlo, ordenó el desahucio. Tras su fallecimiento, la firma tomó posesión del inmueble.

En España, el 43.6 por ciento de la población vive en un departamento alquilado a precio de mercado; es más del doble de propietarios de vivienda registrados (19.5 por ciento). Según el estudio de EAPN, las familias destinan en promedio el 38 por ciento de su renta neta al alquiler, casi el doble de la media europea.

Doce capitales españolas superan el 30 por ciento del ingreso —que recomiendan expertos— para el pago de rentas; de ellas, las más caras son Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Valencia, Madrid y Segovia, según el portal inmobiliario Idealista.

Hoy se conoce la gravosa operación de las inmobiliarias por pesquisas de la sociedad civil que, a través de organizaciones y redes, ha denunciado esas maniobras mediante campañas.

Así, los colectivos difunden información para mejorar la vivienda, elevar las pensiones, mejorar los servicios públicos y, en general, luchar contra un sistema económico que unifica a la precariedad y el racismo.

La situación actual marca una paradoja: ahora el gobierno del PSOE enfrenta esta crisis aunque ostenta recientes indicadores económicos positivos, como la reducción en el desempleo y crecimiento macroeconómico. Y es así porque las inmobiliarias y *fondos buitres* controlan completamente el sector.

Todos están atentos y diseñan la ruta hacia la próxima elección: desde el sedicente socialista PSOE y su Ministerio de Vivienda, el Partido Popular (PP) y sus socios de Vox y CATALÁ, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien fue acusado por no intervenir para evitar el desalojo.

Ante el escándalo, la oposición de derecha radical en el Congreso impulsó propuestas que “agilicen” desahucios. El PP de Alberto Nuñez Feijóo lideró

No olvidar los suicidios

Ahora pesa en el ánimo de los españoles el impacto en la vivienda por la crisis económica entre 2008 y 2015, traducida en la asfixia financiera para miles de familias por la ola de ejecuciones hipotecarias o desahucios. Esa enorme presión de los bancos orilló a muchos en toda España a suicidarse ante la pérdida de su vivienda; la mayoría eran personas mayores y jubilados con bajas pensiones incapaces de garantizar la deuda familiar.

Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018)



500 desahucios diarios



15 suicidios diarios de jefes de familia



Mientras el PP votaba contra una iniciativa popular con millón y medio de firmas para regular la **dación en pago**.

Tal precariedad se tradujo en:



350 mil personas sin viviendas



y 200 mil en proceso de perderla

Figura jurídica en que un deudor entrega al acreedor un bien o servicio distinto al monto pactado originalmente

La PAD define como “asesinatos”, no suicidios, ocurridos entre 2008 y 2015.

Fuente:

Plataforma Alto los Desahucios



iniciativas contra los pobres, que llamó “respuestas excepcionales” para delimitar los ingresos que debe recibir una familia para ser considerada “vulnerable” y no pagar las hipotecas o un número determinado de abonos.

Detrás de esas iniciativas derechistas, está la presión de empresas que gestionan activos inmobiliarios (cobrar rentas, adquirir y vender espacios, reformarlos y revalorizarlos). Tal es el caso de la microempresa Urbagesa, creada en 2005 con oficinas en Valladolid y Vigo.

Al otro lado de ese campo de batalla están los españoles, muchos inquilinos víctimas de los *fondos buitres* y de los rentistas. Reclaman al Congreso de los Diputados no descongelar la Ley que impedía los desahucios; y reprochan a

Sánchez la tardanza para emitir el Real Decreto de Vivienda, que habría frenado el desalojo de inquilinos vulnerables, como Maricarmen.

Una vez más se distinguió la asertiva intervención del *Sindicato de Inquilinas* a favor de Maricarmen. Su vocera, Alicia del Río, denunció la inacción gubernamental y el neofascismo de las cúpulas políticas que maniobran por sus intereses.

Desalojar a los pobres

El siete de octubre fallecía María del Carmen Abascal Martín (Maricarmen) en el hospital, a 11 días de haber sido expulsada de su casa en el número 5 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el Retiro, Madrid, donde habitó por 70 años.



El desalojo de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años de su casa, el pasado 23 de septiembre desató una oleada de indignación en varias ciudades de España que evidenció el encarecimiento de la vivienda. La presión social ha obligado al gobierno español a disolver los decretos de la vivienda.

A las seis de la mañana, con gran despliegue de fuerza (15 camionetas con decenas de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) ejecutaban el cuarto intento de la inmobiliaria para desalojarla, que en vano intentaron impedir unos 300 vecinos y simpatizantes.

Por su degradada salud fue conducida al hospital universitario Gregorio Marañón; y el siete de octubre se dictaminó su derecho de retorno al hogar, aunque después murió.

Ése fue el caso más sonado porque ocurrió en Madrid. Sin embargo, el 29 de septiembre, en Cerdanyola y Mataró, Barcelona, los Mossos d'Esquadra desalojaron a una familia vulnerable de siete personas (tres menores, uno con autismo y un adulto con 87 por ciento de discapacidad).

El fondo de inversión propietario del inmueble rechazó negociar. “¡Fuera, Fuera, Fuera!”, gritaban vecinos a los agentes de la Policía Nacional que ejecutaban el desalojo. En Europa, para ahorrarse esas manifestaciones, los grandes *tenedores* han aumentado el número de contratos para renta a corta duración; además,

Glosario del abuso

En España, los grandes propietarios de inmuebles controlan más de **110 mil viviendas de alquiler**, la mayoría en zonas urbanas, según la consultora Atlas Real Estate Analytics. Aquí, la definición de cada uno.

Fondos de inversión: según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, unos 541 fondos gestionan más de 50 viviendas cada uno; son originarios de EE. UU., aunque no son mayoría, influyen en los precios y se concentran en las capitales autonómicas.

Fondos de inversión

Blackstone Group. Posee en España entre 20 mil y 45 mil 700 viviendas. Con CaixaBank controla la mayoría de las rentas en Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía.

Lone Star. Controla 80% del mercado con Caixa Bank (41 mil viviendas de alquiler); con Cerberus y Nestar retienen decenas de miles de inmuebles concentrados.

OTRAS: TGP, Cevasa, Stay, Axa, Lazora, Ares, Vivenio Residencial, Grupo Ortiz, Encasa Cibeles, CAMI.

Gran tenedor: personas físicas o jurídicas que controlan más de 10 inmuebles urbanos residenciales o con superficie construida de mil 500 m² para uso residencial.

ya se privilegian los mejores espacios a renta para turistas.

Es así como las élites rentistas, financieras e inmobiliarias promueven desahucios y desalojos forzosos para transformar el derecho a la vivienda en

activo financiero de alta rentabilidad. Cambiar cerraduras, causar molestias a inquilinos incapaces de enfrentar el pago de la renta o hipotecas deja a miles en el desamparo, mientras los gobiernos se pliegan al gran capital. **b**

ENTREVISTA

10

Francis Martínez Mateo

✕ @FranMartinezMx

EN RIESGO, LAS CONQUISTAS SOCIALES LOGRADAS EN BRASIL DURANTE EL GOBIERNO DE *LULA*

EL AVANCE DE LA DERECHA EN BRASIL, UNA AMENAZA PARA LATINOAMÉRICA



ENTREVISTA

12 Francis Martínez Mateo
X @FranMartinezMx

Los resultados de la jornada electoral en Brasil del pasado cinco de octubre obligaron a definir al próximo presidente de la nación en una segunda vuelta programada para el día 25 de octubre, en la que llega con ventaja electoral el candidato de la derecha, Flávio Bolsonaro. Éste, de acuerdo a declaraciones y presentaciones públicas, ha tenido todo el respaldo del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) y particularmente del presidente Donald Trump, espaldarazo al que se han sumado las grandes tecnológicas de Internet y las redes sociales, como Meta.

En diversos países de Latinoamérica que han llevado a cabo elecciones, los candidatos de derecha se han alzado con el triunfo; la mayoría de ellos, según los propios gobernantes —como Abelardo de la Espriella, en Colombia, y Keiko Fujimori, en Perú—, son abiertamente de derecha y lograron imponerse ante candidatos de izquierda gracias al apoyo del gobierno de EE. UU.

El avance de la derecha representa un retroceso para la región, ya que las conquistas sociales se ven amenazadas, tal como ocurre en Brasil. En entrevista con *buzos*, Valério Arcary, destacado historiador marxista, profesor jubilado del Instituto Federal de São Paulo (IFSP) y militante de la corriente Resistência dentro del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en Brasil, analiza el contexto político-electoral de Brasil y sus implicaciones para los pueblos latinoamericanos.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva logró el 45.16 por ciento de los votos en la jornada pasada frente a un 47 por ciento de su contrincante derechista, quienes, de paso, se hicieron de un importante número de curules en el Congreso y las gubernaturas de los estados más importantes, motores económicos del país.

Arcay pone sobre la mesa la fractura interna entre la clase trabajadora, la desproporción en la batalla digital impulsada por la red social Facebook, propiedad de Meta y el peligro inminente de un programa neoliberal que incluye privatizaciones masivas y un alineamiento geopolítico con EE. UU.

en caso de un eventual triunfo de la extrema derecha en el *balotaje* del 25 de octubre, cuando se decida finalmente la contienda presidencial.

Buzos (b).- ¿Cuáles son algunas de las conquistas sociales que están en riesgo de imponerse si gana la derecha en la segunda vuelta?

Valério Arcary (VA).- Mencionaré cinco medidas clave. En el caso de la educación y la salud. Tras el fin de la dictadura en los años 80, se conquistó la regla constitucional que obliga al gobierno federal a invertir un mínimo del 18 por ciento de sus ingresos anuales en educación pública y un 25 por ciento en salud pública. Los bolsonaristas ya declararon que quieren liberarse de esta regla que condiciona la inversión. En el caso de la previsión social y jubilaciones, hoy 41 millones de personas se benefician de la seguridad social. La regla actual establece que el piso de la jubilación equivale al salario mínimo, el cual se actualiza anualmente con la inflación y un aumento real según el crecimiento económico. Van a desvincular la remuneración básica de las pensiones del salario mínimo, dejando sin garantía qué tipo de actualización tendrán los jubilados.

No hay duda de que buscan un ajuste fiscal y más austeridad. También han declarado públicamente un recorte brutal de la capacidad de gasto mediante un ajuste fiscal de *austericidio* y máxima reducción de la inversión pública. Es una receta ultraliberal, salvaje, equivalente al plan de choque de Javier Milei en Argentina, que prevé una reducción del 2.5 por ciento del PIB, equivalente a

unos 60 mil millones de dólares. Se esperan también más privatizaciones, porque han dicho que ya tienen un plan, quieren privatizar la mayor compañía de la economía brasileña, Petrobras —cuando Brasil produce más de cuatro mil millones de barriles y es uno de los cinco mayores productores mundiales—, así como los bancos públicos, que distinguen al sistema financiero brasileño. También representa una ofensiva ambiental y el negacionismo. La masa de la burguesía y el bolsonarismo son negacionistas climáticos porque responden a los intereses de la burguesía agraria, que busca expandir la frontera agrícola mediante la quema de la selva amazónica para la ganadería y el cultivo de granos. Todo esto es inseparable del peligro para las libertades democráticas. Se inspiran en Bukele; saben que un ajuste de estas proporciones no se puede ejecutar sin limitar las libertades y subvertir el régimen democrático.

b.- En la batalla digital, las fuerzas de derecha han mostrado una enorme capacidad apoyada en algoritmos y corporaciones estadounidenses. ¿Qué le ha faltado al movimiento progresista en este campo?

VA.-Brasil tiene la peculiaridad de ser uno de los países donde la población pasa más tiempo en Internet: en promedio, más de seis horas diarias en redes sociales. Estas redes no son un espacio neutral; están dominadas por compañías norteamericanas porque no logramos constituir redes sociales nacionales. Durante la campaña electoral hubo una utilización a gran escala de granjas de *bots* y servidores que reprodujeron a





El pasado siete de octubre, miles de jóvenes marcharon por el centro de Río de Janeiro (arriba) en respaldo a la candidatura del presidente Luiz Inácio *Lula* da Silva y en rechazo a Flávio Bolsonaro, su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El respaldo fue convocado por organizaciones juveniles, entre ellas la Unión Nacional de Estudiantes (UNE). El candidato de derecha Flávio Bolsonaro (abajo) llega a la segunda vuelta con el respaldo de Washington. De ganar la presidencia de Brasil, amenaza con seguir la política de su padre, una de ellas es acelerar la destrucción de la selva amazónica, la mayor selva tropical del planeta.



ENTREVISTA

14 Francis Martínez Mateo
X @FranMartinezMx



Valério Arcary, historiador y militante de la corriente Resistência dentro del PSOL, autor del libro *El martillo de la historia. Ensayos sobre la urgencia de la revolución contemporánea*, es uno de los intelectuales brasileños más importantes. Es contundente: “la clave para la victoria es conquistar una mayoría político-social que comprenda el peligro apocalíptico que nos amenaza”.

➤ una escala inconcebible mensajes en todas las aplicaciones, concentrándose la batalla principal en *WhatsApp*. En la izquierda contamos con una nueva generación de jóvenes influenciadores, agitadores y divulgadores muy creativos e inteligentes —algunos elegidos diputados nacionales—, pero salimos en una condición defensiva durante la elección. Es necesario reorganizar la campaña de *Lula* para pasar al contraataque y recuperar el terreno perdido también en las redes sociales.

b.- Rumbo a la segunda vuelta, ¿cuál debe ser la estrategia de la izquierda y del Partido de los Trabajadores ya que, como se aprecia en los resultados, la mejora en las condiciones materiales no bastó para frenar a la extrema derecha?

VA.- La clave es readecuar nuestra táctica política hacia el *balotaje*. La cuestión central es convencer al segmento de abstencionistas —aproximadamente ocho millones de personas dentro de los 33 millones que no fueron a votar y que en

las encuestas mostraban preferencia por *Lula*— de que estamos ante un peligro.

Respecto a por qué las mejoras materiales no frenaron a la extrema derecha, se debe a una profunda fractura en la clase trabajadora. Entre los más pobres que ganan hasta dos salarios mínimos, *Lula* mantiene el respaldo. Sin embargo, entre los trabajadores con mayor nivel de instrucción y salario —las capas medias asalariadas u obreros industriales de grandes centros— hemos perdido la mayoría y se han desplazado hacia la extrema derecha. Aunque su vida esté un poco por encima de la supervivencia, sigue siendo muy difícil. Al mejorar levemente su inserción económica, sufren el castigo de la privatización de la vida: la decadencia de la educación y salud públicas los obligan a contratar servicios privados para sus hijos y padres. Además, la extrema derecha tiene una mayoría aplastante en la pequeña burguesía histórica y la nueva clase media.

Asimismo, no haber tenido como prioridad gubernamental la

transformación profunda de la educación pública universal de calidad para cerrar la brecha con la educación privada ha tenido un impacto electoral y social enorme. El descontento de estas capas intermedias se tradujo en una desaprobación constante del gobierno de *Lula*.

b.- De cara al balotaje, ¿qué es lo que se juega en Brasil y por qué América Latina y el mundo deben seguir con atención esta definición?

VA.- No es una exageración decir que una derrota de la izquierda en Brasil tendrá un impacto terrible en toda América Latina. Países como México quedarían en una situación de gran aislamiento y el dominio norteamericano daría un salto cualitativo extraordinario. Esto ocurre en un contexto donde venimos de derrotas electorales sucesivas en la región.

Un triunfo de la alianza entre Trump y Bolsonaro cambiaría la relación de fuerzas en el sistema internacional de Estados y en la disputa de hegemonía mundial entre EE. UU. y China, dada la



El candidato Luiz Inácio *Lula* da Silva ha llamado al electorado brasileño a defender la soberanía y la democracia frente al intervencionismo norteamericano, que de la mano del candidato derechista Flávio Bolsonaro, pretende el retorno del bolsonarismo.

reserva estratégica monumental que representa Brasil.

Lo que se juega no es sólo el destino de la nación brasileña, sino un impacto a escala mundial. Nuestra responsabilidad como izquierda es unirnos de manera firme, cerrar filas y luchar hasta el final, porque es una batalla vital frente al precipicio de una regresión histórica.

b.- ¿Qué representó para el pueblo brasileño el resultado de la primera vuelta?

VA.- Ha sido una elección muy dura. Asistimos a una victoria de la extrema derecha liderada por una corriente que tiene un impulso protofascista, que no solamente ha posicionado a Flávio Bolsonaro con un dos por ciento más que la candidatura del presidente *Lula* da Silva, sino que ha ganado en primer turno la elección de los gobernadores en toda la región sudeste: en São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro —que es el triángulo estratégico de Brasil, donde está concentrada la mayor parte de la capacidad de producción y de la

población—, pero también en Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, la región Sur de Brasil.

Además, han ganado la mayoría parlamentaria. Tienen una mayoría en la Cámara de Diputados y una mayoría en el Senado: de 84 senadores, ahora tienen 49, por lo que necesitan solamente cinco votos para alcanzar la mayoría calificada de dos tercios, condición requerida para una revisión constitucional. A lo que asistimos fue a una onda poderosísima que podemos definir como un tsunami reaccionario.

Para la izquierda ha sido una derrota. No siempre caminan juntas: en 1989, cuando *Lula* llegó al *balotaje* por primera vez, tuvimos una derrota electoral frente a Fernando Collor; en 1989, en la primera elección presidencial en democracia, Fernando Collor de Mello superó al propio *Lula* da Silva tras liderar la primera ronda, pero logramos una victoria política por el gran protagonismo de la izquierda y el alineamiento de los principales sindicatos y movimientos sociales.

b.- Con esta mayoría confirmada de la extrema derecha en el Congreso y en los estados clave, ¿qué le queda a la clase trabajadora y a la sociedad brasileña?

VA.- Representa una amenaza en todos los terrenos. En primer lugar, el campo de la extrema derecha tiene un alineamiento incondicional con el gobierno de EE. UU.; apuestan a un acercamiento con Donald Trump y significará seguramente la entrada de Brasil en el ‘escudo de las Américas’.

Esta estrategia obedece al cálculo de que, para el capitalismo periférico brasileño, la subordinación a EE. UU. será un proceso de recolonización por las ambiciones del imperialismo norteamericano de dominar los recursos estratégicos de nuestra economía. Para la gente, para la clase trabajadora y los oprimidos, significará que las conquistas y las reformas arrancadas con grandes luchas sociales están amenazadas.

Finalmente, el historiador comentó que al sector de brasileños indecisos le queda sumarse al sector progresista en las elecciones de este 25 de octubre. **b**



DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN DURANGO, UN COLAPSO ESTRUCTURAL

REPORTAJE

José Emilio Soto
X @JEmilioSoto

17

UNIDAD MEDICA DE ALTA
HOSPITAL ESPECIALIDAD DE ESPECIALIDADES

En Durango, acudir a la unidad médica se ha convertido en un acto de fe para miles de pacientes. La expectativa de recibir un tratamiento completo choca a diario contra la realidad marcada por anaqueles vacíos. Y aunque tardíamente el gobernador del estado, Esteban Villegas, lo haya reconocido públicamente, en los hechos, la crisis sanitaria deja en el desamparo a los ciudadanos más pobres.



REPORTAJE

18 José Emilio Soto
X @JEmilioSoto

El desabasto de medicamentos en Durango no es un fenómeno reciente. Más bien es la culminación de una falla estructural que se ha agravado durante los últimos años, marcada por decisiones políticas, problemas financieros y un modelo de distribución ineficiente.

Frente a la ventanilla de farmacia de un hospital público en la capital del estado, Estela González grabó un video con su teléfono mostrando los estantes vacíos. Su hija había sido diagnosticada con linfoma, pero el medicamento necesario para el tratamiento llevaba meses agotado en el hospital. “Aquí no tenemos más que la protección de Dios; no hay medicamentos”, reportó en el video publicado en enero de 2026. “Ni siquiera paracetamol”, enfatizó.

Las imágenes grabadas en el Hospital General de Gómez Palacio contradecían directamente las declaraciones públicas del gobernador Esteban Villegas, quien afirmaba que el índice de abastecimiento de medicamentos era del 90 por ciento. El caso de Estela González no es aislado. Desde la capital duranguense hasta la región Lagunera, tanto en el sistema de salud estatal como en organismos federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) predomina el desabasto de medicamentos, que ha durado años afectando a la gente de menores ingresos.

Las raíces de esta crisis se remontan a 2022, cuando el entonces Secretario de Salud estatal afirmó que el índice de abastecimiento de medicamentos había aumentado del 28 a más del 80 por ciento. Incluso presumió que el centro oncológico de Durango nunca había sufrido escasez de fármacos oncológicos y que recibía pacientes de Chihuahua, Zacatecas y de otros estados, donde los centros oncológicos

habían cerrado debido a la falta de medicamentos. En aquel momento, esta “narrativa de recuperación” se difundió ampliamente como un caso de éxito de la política sanitaria estatal.

Sin embargo, en 2025, la situación se había revertido por completo. El sistema de salud estatal había colapsado por el desabasto generalizado de medicamentos que afectaba a todas las instalaciones médicas. En julio de este año, el gobernador Villegas finalmente reconoció: “¿Nos faltan medicamentos? Sí. Debemos afrontar la realidad”.

Explicó, además, que el problema no residía en la tasa general de abastecimiento que, según afirmó, se mantenía entre el 80 y el 90 por ciento, sino en el hecho de que “el 20 por ciento faltante corresponde a los medicamentos más necesarios en un momento, lugar o región específicos”.

La brecha entre este discurso oficial y la realidad se evidenció en el video de Estela González. Posteriormente, el Secretario de Salud del estado, Moisés Nájera Torres, admitió que el abastecimiento de medicamentos en los centros médicos oscilaba entre el 50 y el 60 por ciento; y el desabasto alcanzaba el 60 por ciento en el Hospital 450, los Centros de Salud N° 1 y N° 2, y el CESA 450.

Anatomía de un colapso estructural

La crisis de medicamentos en Durango no es un incidente local aislado; sino el colapso del sistema de salud nacional agudizado en los últimos meses. En 2019, durante un alegato sobre la necesidad de combatir la corrupción y reducir los precios, el Gobierno Federal abandonó el modelo de adquisición descentralizada vigente hasta entonces. Concentró la autoridad de compra en la Secretaría de Hacienda y, más tarde, la transfirió a la empresa estatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

En la práctica, este modelo de “adquisición consolidada” tuvo consecuencias desastrosas: muchas empresas farmacéuticas se retiraron de las licitaciones, y el ciclo de adquisiciones 2025-2026 se vio empañado por escándalos de corrupción y sobreprecios que sumaron mil 500 millones de pesos (mdp).

Entre los problemas detectados figuraba el esquema de empresas “fantasma”, la compra de medicamentos sin registro sanitario y la selección de proveedores incapaces de satisfacer la demanda. Finalmente, la licitación fue cancelada, lo que provocó retraso de abastecimiento médico durante meses.

Después, se otorgaron mayores facultades a Birmex. Según un aviso publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 29 de mayo de 2026, Birmex sería la única entidad contratante entre todo el sistema de salud pública y la industria farmacéutica; organismos como el IMSS, el ISSSTE, el IMSS-Bienestar y los servicios estatales de salud ya no firmarían contratos de adquisición.

Esta reforma, que prometía agilizar los procesos, ha suscitado nuevas inquietudes: ¿tiene Birmex la capacidad de gestionar una cadena de suministro de tal magnitud? La industria farmacéutica ha expresado su rechazo a los nuevos requisitos de etiquetado porque exigen el etiquetado con el escudo nacional y leyendas como “Gobierno de México”, “La salud es un derecho” y “Uso exclusivo del sector público”, en todos los medicamentos del sector público.

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos (Canifarma) estima que este cambio constituiría un costo adicional de aproximadamente 10 mil mdp a los fabricantes, mientras que la incertidumbre sobre los volúmenes de contratación eleva el riesgo de la inversión. La Secretaría de Salud de Durango atribuye la crisis de desabasto a la disminución del presupuesto federal. La dependencia estima que los recortes



La entidad enfrenta —como ocurre en el país— una crisis en el sistema de salud, debido a recortes presupuestarios, mala gestión en la compra de medicamentos e insumos y proyectos fallidos como la “Megafarmacia”. El Gobierno Federal; en el extremo, ha criticado a los médicos y enfermeras por alzar la voz y demandar mejores condiciones y atención a la salud.

acumulados entre 2024 y 2026 superan los mil 800 mdp.

Tan solo durante el primer semestre de 2026, los fondos federales para Durango se redujeron; en marzo se recortaron 120 mdp, en mayo, la misma cantidad y se anunció un recorte de 400 mdp en julio. El propio gobernador reconoció: “Éste no es un estado rico; naturalmente, estoy preocupado”.

Tales disminuciones han afectado directamente la adquisición de medicamentos, la contratación de personal y el mantenimiento de la infraestructura. En la región de La Laguna (que abarca 12 municipios), los fondos federales para la salud se desplomaron de 11 a cinco mdp: una caída de 47 por ciento. De los 84 tipos de medicamentos que figuran en la lista de fármacos esenciales, sólo se han entregado 50.

Los rostros de los afectados

Para los pacientes con enfermedades crónicas que dependen del sistema público de salud, el desabasto

de medicamentos implica la interrupción del tratamiento, el deterioro de su estado de salud y la ruina económica.

En el Hospital 450 de la ciudad de Durango, la escasez se concentra en medicamentos para afecciones crónicas como la diabetes y la hipertensión.

Por otro lado, la situación resulta más crítica para los pacientes y sus familias en el Hospital General N° 1 del IMSS; en septiembre de 2026, el centro médico se vio envuelto en un escándalo que combinaba plagas de chinches y falta de medicamentos. Un familiar de un paciente relató haber matado tres chinches en una cama situada en el pasillo del hospital: “nunca suministran la medicación; llevo tres meses intentándolo y siguen diciendo que vendrán el lunes o el jueves”.

Aún más impactante fue el fallecimiento de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del hospital entre el 15 y 20 de septiembre. Los informes oficiales confirmaron que cuatro de los

bebés dieron positivo en *Klebsiella pneumoniae* (bacteria en forma de bastón). Las familias rechazaron la explicación del IMSS, que atribuía las muertes a un patógeno único.

Diego Tovarín, padre del bebé Darío, tras una reunión de tres horas denunció: “estamos más enfadados ahora que cuando llegamos. No sé cómo expresarlo: no es sólo una bacteria; es mucho más que eso. Nos enfrentamos a una situación verdaderamente trágica. No crean los comunicados emitidos por el IMSS”.

Los abogados de las familias presentaron una denuncia penal colectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que alegaron negligencia médica y retraso en la notificación. Posteriormente, el IMSS suspendió al director del hospital y al jefe de la UCIN, y anunció su colaboración con la investigación de la FGR.

El sector empresarial también se sumó a exigir rendición de cuentas: Raúl Montelongo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del



REPORTAJE

20 José Emilio Soto
X @JEmilioSoto

Estado de Durango, alertó que el sector privado aporta aproximadamente 94 por ciento del presupuesto del IMSS y destacó: “Los empresarios cumplimos con nuestras obligaciones hacia los trabajadores, pero el IMSS está incumpliendo las suyas con ellos”.

Para los pacientes oncológicos, el costo resulta mayor. Aunque el Centro Estatal de Cancerología de Durango se esfuerza por mantener la tasa de abastecimiento de medicamentos de 70 por ciento, el Secretario de Salud del estado admitió que el suministro de fármacos oncológicos de alto costo “sigue siendo un desafío”.

La paciente Anavelina Vargas viajó desde Gómez Palacio hasta la capital del estado para recibir tratamiento, pero su medicamento no estaba disponible. “Ni siquiera nos avisaron que el medicamento estaba agotado... me trataron con falta de respeto”, denunció.

Otra paciente, María del Socorro González, llevaba tres o cuatro meses sin recibir los medicamentos necesarios, a pesar de que los doctores habían instruido a su sobrina para que “no dejara pasar ni un solo día sin esa pastilla”.

Moisés Nájera Torres, titular de Salud estatal, reconoció que algunos pacientes con enfermedades de alto costo han tenido que comprar ellos mismos los materiales necesarios para las cirugías. “Se lo dije el año pasado. Debido a los recortes presupuestarios, para nosotros también es imposible; debemos comprar medicamentos de quimioterapia y pagar a los proveedores de radioterapia”, lamentó.

Protestas de los trabajadores

En enero de 2026, el sindicato del sistema estatal de salud denunció la “total indiferencia” del Secretario de Salud, Moisés Nájera. En un video, la secretaria general del sindicato, Rafaela Zapata Morales, precisó el desabasto de medicamentos e insumos y la falta de personal en todas las unidades médicas, mientras acusaba a la dirección de



El gobernador de Durango, Esteban Villegas, anunció, en agosto pasado, una campaña para la distribución masiva de medicamentos e insumos. La meta no se podrá cumplir debido a que es un problema no sólo de déficit presupuestario, sino también del plan federal centralizado de compras de medicamentos y sobre todo, del deterioro del sistema de salud pública, que no ha sido prioridad para el gobierno en turno.

someter a los trabajadores a “acoso y abuso de poder”.

“Denunciamos graves irregularidades en el proceso de promoción laboral, caracterizado por decisiones unilaterales y centralizadas del director de administración de salud, que ignoran los procedimientos establecidos y la participación sindical”, señaló Zapata Morales. El sindicato dirigió una carta al Comité Nacional Mixto de Clasificación para solicitar una investigación sobre las irregularidades en Durango.

Esta muestra pública de disidencia desde dentro del sistema revela otra faceta de la crisis: no solamente los pacientes han sido abandonados; el personal de primera línea también lucha contra la falta de recursos y la indiferencia institucional. Estela González también abordó este tema en su video: “Aquí nadie es prescindible. Nos falta personal; despedirlos es injusto”. Aseguró haber escuchado que algunos médicos ni siquiera habían recibido su salario completo.

Desesperación geográfica

La escasez de medicamentos muestra una dimensión aún más dura en las

zonas montañosas y las comunidades remotas de Durango. En municipios como Mezquital, Vicente Guerrero, Nombre de Dios, Poanas y Súchil se han documentado casos de desabasto de medicamentos, así como fallecimientos derivados de la falta de tratamiento oportuno.

“El gobierno afirma que los niveles de abastecimiento nunca alcanzarán el 100 por ciento; eso es un insulto para las personas más pobres de Durango. No se trata de una cuestión de estaciones o alergias, sino de prioridades políticas”, demandó Jesús García Gurrola, líder comunitario en el municipio de Mezquital. “Cuando hay dinero para rescatar bancos o financiar proyectos extravagantes, lo hacen sin problema; no debe existir excusa para que un niño o una persona mayor se quede sin medicamentos”.

El propio documento de la evaluación del desempeño y la calidad de los servicios de salud a cargo de la Secretaría de Salud del estado y organismos locales como el Instituto de Evaluación de Políticas del Estado de Durango (Inevap) identifican las “barreras territoriales y socioculturales” como riesgos principales, e indican problemas



Birmex es la empresa pública mexicana encargada de la compra, importación, almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos para la salud en el sistema público del país. Pero esta misión no se ha logrado debido a la mala administración, licitaciones a destiempo y priorizando intereses particulares o de grupos, entre otros motivos. Los mexicanos son los principales afectados.

como la “atención médica tardía, la interrupción del seguimiento y la reducción del acceso efectivo” en municipios con poblaciones dispersas, marginadas o indígenas.

Las comunidades remotas enfrentan doble problemática por la escasez de personal y la falta de medicamentos. La evaluación reconoce que la “falta de mantenimiento y abastecimiento de insumos estratégicos” constituye un riesgo crítico que requiere medidas de mitigación, y aboga por reforzar la supervisión de la planificación y el suministro farmacéutico para los centros de salud de alta demanda o de difícil acceso.

Una apuesta de diez millones de pastillas

En agosto de 2026, el gobernador Esteban Villegas activó una campaña masiva de distribución farmacéutica, mediante la que se comprometió a entregar más de 10 millones de unidades de medicamentos e insumos

médicos a 315 centros de salud en 39 municipios, con una inversión de 270 mdp. La distribución comenzó en la madrugada del 21 de agosto; el propio gobernador supervisó la salida de los camiones desde el almacén.

Sin embargo, como se trata de un sistema que reconoce oficialmente el déficit presupuestal de mil 800 mdp, resulta dudoso que una inversión de 270 millones sea suficiente para subsanar tales carencias estructurales. El problema de fondo en la crisis farmacéutica de Durango no es una cuestión de logística o financiamiento; es, más bien, el resultado de una confluencia de factores: el fracaso del modelo federal de compras centralizadas, la disminución de la capacidad fiscal local y el continuo deterioro de la salud pública como prioridad política.

En septiembre de 2026, Birmex inició una nueva ronda de compras consolidadas que abarcaba 35.36 millones de unidades de medicamentos e incluía a

instituciones como el IMSS, el ISSSTE y Petróleos Mexicanos.

Se implementaron nuevas normas, entre ellas, la prohibición de las subcontrataciones, medidas para prevenir la colusión en las licitaciones y la exigencia de fianzas de cumplimiento para evitar que se repitan los escándalos de corrupción que marcaron la anterior ronda de licitaciones. Un total de 115 empresas farmacéuticas participaron en el concurso; sin embargo, las entregas correspondientes a este periodo de adquisiciones no comenzarían sino hasta enero de 2027.

¿Qué significa esta espera para pacientes como la hija de Estela González? Su linfoma empeora, pero la farmacia del hospital sigue sin medicamentos. En Durango, acudir a un centro médico ya se convirtió en un “acto de fe”, como rezaba un titular. El objeto de esa fe no es Dios, sino un Estado que reiteradamente promete asignar recursos pero no lo hace. **b**

REPORTAJE

22

Rocío Casas

✕ @RocioCasas61295



BCS: UNA DÉCADA DE PROYECTOS Y PROMESAS PARA GARANTIZAR ELECTRICIDAD



Desde 2017 se han planteado distintas alternativas para atender la demanda eléctrica de Baja California Sur: un cable submarino para enlazar el estado con el Sistema Interconectado Nacional, nuevas centrales de generación, plantas termosolares y proyectos de almacenamiento. El cable fue descartado en 2020 y, nueve años después del anuncio original, el estado continúa operando como un sistema eléctricamente aislado; y en lo que va de 2026 se han acumulado interrupciones del servicio.



REPORTAJE

24 Rocío Casas
X @RocioCasas61295

Baja California Sur mantiene la condición que determina cómo se genera y distribuye la electricidad en el estado: su instalación permanece separada físicamente del Sistema Interconectado Nacional. El Centro Nacional de Energía (Cenace) identifica al Sistema Interconectado Baja California Sur y al Sistema Interconectado Mulegé como procedimientos eléctricamente aislados. En su documentación técnica define esta condición para aquellas instalaciones que no están físicamente interconectadas al Sistema Interconectado Nacional.

La situación no es nueva. En 2017, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un proyecto para conectar Baja California Sur con el sistema nacional mediante un cable submarino. En junio de ese año, la CFE presentó el proyecto de interconexión eléctrica de Baja California Sur mediante un cable submarino que cruzaría el Mar de Cortés.

La obra contemplaba la conexión del sistema aislado de Baja California Sur con el Sistema Interconectado Nacional y una línea de transmisión de corriente directa de alta tensión. CFE señaló que la interconexión permitiría poseer un respaldo ante contingencias y atender el crecimiento de la demanda eléctrica estatal.

El proyecto fue estimado entonces en alrededor de mil millones de dólares (mdd) y se contemplaba activarse en 2021. También se planteó que la interconexión permitiría recibir electricidad generada en centrales de ciclo combinado ubicadas en Sonora y Sinaloa.

Para agosto de 2019, la obra no recibió recursos para ese ejercicio fiscal. En ese momento, Víctor Castro Cosío, entonces delegado de programas federales en Baja California Sur, declaró que el cable no se construiría durante ese año y reveló que posteriormente debía determinarse si era la alternativa adecuada.

Ese mismo año, la entonces senadora Guadalupe Saldaña presentó, ante el Senado, una propuesta en la que avisó que el proyecto del cable submarino había sido cancelado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En el documento también cuestionó la suspensión de mecanismos de respaldo para atender la demanda eléctrica durante los periodos de mayor consumo.

Así, en febrero de 2020, durante una visita a Baja California Sur, el entonces Presidente habló directamente sobre el proyecto e indicó que “no se realizará el proyecto del cable submarino” y que el Gobierno Federal optaría por fortalecer la generación de la CFE en Baja California Sur.

Explicó que la estrategia contemplaba utilizar gas natural para generar electricidad y anunció recursos para construir una termoeléctrica en el estado. “Esto se va a resolver”, aseveró, y agregó que con la nueva generación se garantizaría el suministro eléctrico y se evitarían los “apagones”.

El proyecto vinculante con el Sistema Interconectado Nacional no se retomó como alternativa durante ese gobierno. Mientras tanto, la demanda eléctrica de Baja California Sur se incrementó.

Demanda exhibe limitaciones e incremento del costo

La señora Carolina Ortega, habitante de la colonia El Cardonal, en La Paz, dijo a este medio que a pesar de los cortes de la energía eléctrica, su último recibo de luz ascendió a siete mil 448 pesos, correspondiente al bimestre mayo-junio. Lo que representa un incremento de cinco mil 948 pesos.

“Si nos va a afectar, pero como vivimos tres personas en la casa, vamos a dividir el pago. A cada uno nos tocará poner alrededor de 2 mil 500 pesos para cubrir el recibo, aunque se nos hace mucho para una vivienda tan pequeña”, puntualizó.

Así, los altos cobros de electricidad, sumados a las constantes interrupciones del servicio en las colonias, conocidos popularmente entre las familias como “tandeos de luz”, han generado inconformidad, además, cuestionan que las tarifas que pagan no se reflejen en un suministro continuo y eficiente. Los cortes a la energía eléctrica también han ocasionado que varios electrodomésticos se descompongan a causa de la repentina carga de luz, según comentó.

En agosto de 2023, en temporada de apagones, Víctor Castro Cosío reconoció las condiciones del sistema eléctrico estatal y advirtió que el crecimiento poblacional había superado las proyecciones utilizadas por CFE.

“Baja California Sur crece y no tiene un sistema eléctrico robusto”, reconoció entonces el gobernador. En aquella ocasión se informó sobre la incorporación de unidades adicionales de generación para atender la demanda, particularmente en La Paz y Los Cabos.

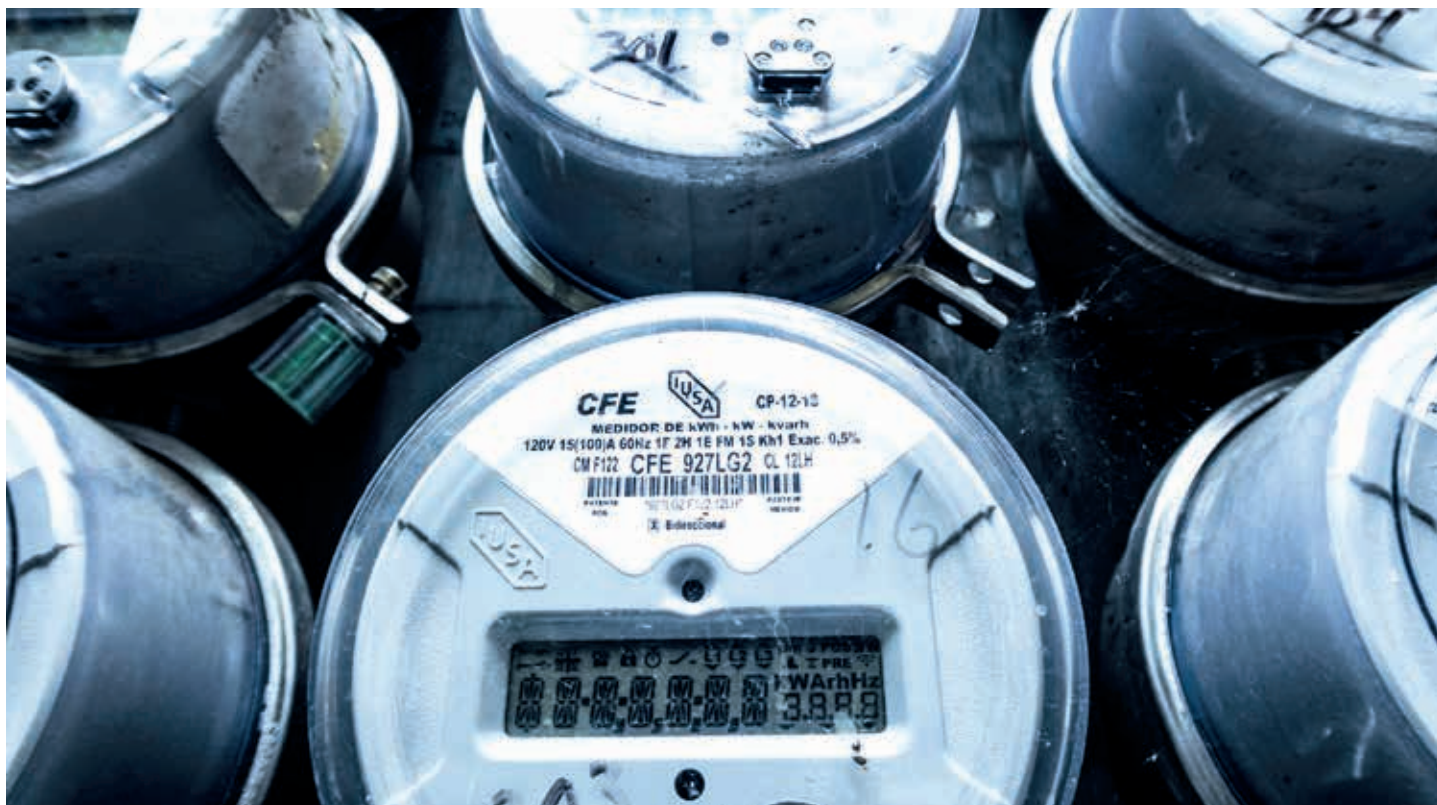
En los últimos años, los cortes de electricidad se multiplicaron y evidenciaron el desinterés del Gobierno Federal y estatal sobre el abastecimiento de energía eléctrica, según reportaron organizaciones de la sociedad civil.

En julio pasado, la organización CERCA contabilizó 71 interrupciones desde el 30 de mayo, principalmente en La Paz y Los Cabos. CFE anunció un incremento de 116 megawatts mediante unidades de generación especiales para enfrentar la demanda de verano.

Castro Cosío aclaró entonces que la demanda podía alcanzar más de 700 megawatts durante el verano, frente a alrededor de 600 en invierno.

Sin embargo, Jacqueline Valenzuela, directora de CERCA, pidió no atribuir todos los cortes eléctricos a una falta de generación. “No podemos afirmar que los apagones sean consecuencia de un déficit de generación”, destacó, al señalar que no contaban con información oficial suficiente para establecer esa relación.





Miles de familias de la entidad ven aumentar sus recibos de luz debido a los apagones constantes que se presentan, sobre todo en temporadas de calor. La señora Carolina Ortega, de la colonia El Cardonal, en La Paz, se sorprendió cuando el cobro por consumo de luz fue de siete mil 448 pesos, cuando en el recibo anterior le cobraron mil 500 pesos. Algunos restaurantes llegan a pagar hasta 100 mil pesos mensuales de electricidad, denunció Julia Lorena Hinojosa Oliva, consejera de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en La Paz. La CFE propuso la construcción de una Central de Combustión Interna (abajo) en Los Cabos para la producción de energía eléctrica, proyecto autorizado por la Semarnat tras avalar el documento de Manifestación de Impacto Ambiental. Los habitantes del estado confían en que no sea un proyecto sólo en el papel, como ha ocurrido con otros desde hace casi una década.



REPORTAJE

26 Rocío Casas
X @RocioCasas61295

➤ Durante 2026, la CFE justificó diferentes interrupciones por fallas específicas en la infraestructura eléctrica. En agosto, una dificultad en la subestación La Paz afectó a alrededor de seis mil 200 usuarios. La empresa difundió que había trasladado un transformador desde Los Cabos para atender la contingencia y restablecer el servicio.

En ese episodio, la Comisión reiteró que no existían complicaciones sobre el volumen de generación. “No hay problemas de capacidad; tenemos suficiente para alimentar a todos los usuarios de la ciudad”, subrayó la empresa.

También se reportaron interrupciones relacionadas con la red de distribución. Durante las reuniones posteriores con autoridades, CFE estableció que alrededor del 80 por ciento de las interrupciones analizadas estaban relacionadas con árboles y vegetación que interferían con las líneas de distribución.

Otros cortes fueron atribuidos a las salidas de las unidades de generación y a maniobras operativas realizadas para mantener la estabilidad del sistema. La explicación de la CFE, por tanto, varió según el episodio: generación fuera de servicio, fallas en subestaciones, maniobras operativas y problemas en la red de distribución.

El 28 de agosto, después de una reunión con representantes de la CFE, autoridades estatales y empresarios, el gobernador informó que había preguntado a la Comisión si continuarían los apagones relacionados con la capacidad eléctrica. “Categoricamente dijeron que no”, sentenció el gobernador sobre la respuesta de CFE.

Sin embargo, días después se registraron más interrupciones en distintos puntos del estado, que afectaron a miles de hogares, negocios e instituciones públicas. Los cortes también dañaron infraestructura hidráulica; por ejemplo, el 31 de agosto, las interrupciones de energía estropearon pozos, bombas y sistemas de rebombeo, con repercusiones en el suministro de agua. En El Cardonal,

habitantes reportaron un periodo cercano a las 12 horas sin electricidad.

Los cortes de energía eléctrica han provocado, en primer lugar, que el sector empresarial lo denuncie y solicite al gobierno estatal retomar las mesas de trabajo con la CFE; por ejemplo, Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Los Cabos reportó el incremento de sus gastos en la producción de electricidad durante los cortes, ya que utilizan plantas de emergencia para mantener sus operaciones, particularmente en hoteles y establecimientos que requieren electricidad continua; insistió en que se retomaran los proyectos.

La promesa de las centrales termosolares

En agosto de 2025, la Presidenta anunció dos centrales termosolares para Baja California Sur, con una inversión estimada de 800 mdd. El proyecto contempla dos centrales de 50 megawatts respectivamente en una primera etapa, y almacenamiento de energía térmica. El Gobierno Federal estimó que podrían resultar beneficiados entre 100 mil y 200 mil hogares.

La Secretaría de Energía (Sener), por su parte, explicó que la tecnología termosolar permite almacenar energía térmica y mantener la generación durante periodos intermitentes de radiación solar directa. Estas centrales están planteadas como generación dentro del sistema de Baja California Sur. No corresponden al proyecto de interconexión mediante cable submarino anunciado en 2017.

Otro de los proyectos de mayor capacidad es el de la Central de Combustión Interna Los Cabos. Para éste, la CFE presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el documento de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que ya fue autorizado.

Según el proyecto público, éste contempla 240 megawatts provenientes de gas natural y 228 megawatts con diésel

como combustible alterno. La construcción está prevista para un periodo de tres años y una operación de hasta 30. La central contempla 13 motores de combustión interna y sus respectivos generadores eléctricos, además de transformadores, líneas de transmisión y una subestación.

El proyecto también aparece en la planeación de infraestructura eléctrica de Los Cabos. La ficha de Proyectos México identifica una Central de Generación Co-Localizada en Los Cabos con tecnología de combustión interna, generación fotovoltaica y almacenamiento de energía. El proyecto está previsto para conectarse directamente al Sistema Eléctrico Baja California Sur.

La ficha establece el 19 de octubre de 2026 como fecha prevista para la presentación de propuestas, con fallo el nueve de noviembre y formalización del contrato el 1° de diciembre.

Si embargo, la autorización ambiental de la central de Los Cabos generó cuestionamientos entre organizaciones ambientales. Jacqueline Valenzuela denunció que en Cabo San Lucas ya existen concentraciones de contaminantes antes de que opere la nueva infraestructura.

“Ya se encuentran niveles altos de concentración de contaminación del aire”, alertó al referirse a la presencia de material “particulado” en la zona.

En tanto, la organización CERCA también sostuvo, a partir de su análisis de la MIA, que la operación de la central podría incrementar hasta 30 por ciento las emisiones contaminantes en la cuenca atmosférica de Cabo San Lucas. El porcentaje corresponde al análisis presentado por la organización a partir de la información de la MIA.

Valenzuela también cuestionó la información sobre la capacidad instalada de las centrales existentes. “Hay algunas unidades que no operan porque ya no tienen la capacidad de operar”, lamentó sobre los equipos que



Varios son los proyectos que a lo largo de una década no han aterrizado para la producción de energía eléctrica en Baja California Sur. La CFE propuso la interconexión eléctrica mediante un cable submarino que cruzaría el Mar de Cortés, el cual quedó en el olvido, debido al elevado costo.

permanecen registrados en la capacidad instalada.

Durante el proceso de consulta pública, las organizaciones solicitaron información sobre los efectos de la nueva central en la calidad del aire y en la cuenca atmosférica de Los Cabos. Carlos Mancilla, integrante de BCSicetos, también cuestionó las respuestas contenidas en el procedimiento ambiental y advirtió que persistían dudas entre los participantes de la consulta.

La oposición ambiental se extendió a otras organizaciones y colectivos que durante 2026 realizaron movilizaciones para cuestionar proyectos energéticos, inmobiliarios y turísticos en Los Cabos y La Paz.

En el municipio de Mulegé, el Gobierno Federal planteó el proyecto Oasis BCS, basado en una combinación de energía solar, almacenamiento mediante baterías, producción de hidrógeno verde y celdas de combustible.

La propuesta pertenece a un plan federal de expansión de energías

renovables y está dirigida al Sistema Aislado Mulegé. El proyecto contempla generación solar y almacenamiento para reducir el uso de combustibles fósiles. Mulegé constituye, junto al sistema de Baja California Sur, una de las áreas eléctricamente aisladas identificadas por Cenace.

Una década después...

En 2017, la opción consistía en llevar electricidad hacia Baja California Sur desde el Sistema Interconectado Nacional mediante un cable submarino. En 2020, esa obra fue descartada y el Gobierno Federal cambió la estrategia hacia la generación en el propio estado.

Hoy, la entidad proyectó una central de 240 megawatts para Los Cabos, dos centrales termosolares, programas de almacenamiento y nuevas obras para reforzar la infraestructura eléctrica. Son inversiones distintas a la interconexión planteada hace casi una década, pero nunca se concretó.

Mientras esos proyectos avanzan, Cenace mantiene a Baja California Sur entre los sistemas eléctricamente aislados del Sistema Interconectado Nacional. En 2026, los apagones afectaron a usuarios, comercios, sistemas de agua y familias cuyos integrantes dependen de equipos eléctricos para recibir atención.

CFE sostiene que existe capacidad suficiente y que las interrupciones recientes obedecen a distintas fallas en la infraestructura. El gobierno estatal reclama que los compromisos para evitar nuevos cortes no se cumplieron. Los empresarios piden volver a las mesas de trabajo y los grupos ambientales cuestionan los impactos de algunas de las centrales diseñadas.

El proyecto del cable submarino quedó atrás. La nueva estrategia todavía está en construcción. Y, mientras tanto, Baja California Sur depende todavía de un sistema eléctrico aislado para cubrir una demanda que está aumentando. **b**

REPORTAJE

28 Ana Velia Maldonado Ramos
✕ @ana_maldon9do

EL CIERRE DE AHMSA EN MONCLOVA, MINEROS EN EL ABANDONO

Durante décadas, miles de familias construyeron su vida alrededor de Altos Hornos de México (AHMSA). Trabajar en la siderúrgica significaba más que conseguir un empleo: representaba estabilidad, ingresos para sostener una familia y, en muchos casos, la posibilidad de que una generación alcanzara mejores condiciones de vida que la anterior. Pero el cierre de la empresa es una verdadera desgracia para los trabajadores.



REPORTAJE

30

Ana Velia Maldonado Ramos

✉ @ana_maldon9do

Cuando AHMSA disminuyó sus operaciones, entre finales de 2022 y 2023, el problema rebasó rápidamente las puertas de la siderúrgica; luego demostró que los trabajadores, fundamentales durante sus años de bonanza, ahora se encontraban desamparados.

Con la suspensión, se contaban seis mil obreros y entre dos mil y tres mil empleados de confianza. Es decir, aproximadamente ocho mil o nueve mil trabajadores estaban vinculados directamente a AHMSA cuando se detuvieron los trabajos, de acuerdo con la investigación *Monclova ante el cierre de AHMSA. Un enclave siderúrgico reconfigurado*, de Eleocadio Martínez Silva y Georgina Rojas García, publicada en 2026 por la *Revista Mexicana de Sociología* de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por cada trabajador hay una familia que dentro de la economía local ha dependido directa o indirectamente de la actividad siderúrgica durante décadas. Comercios, proveedores, transportistas, pequeños negocios y servicios conformaban una cadena económica en cuyo centro estaba AHMSA.

En septiembre pasado, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles reconoció a nueve mil 857 trabajadores y extras trabajadores de AHMSA como acreedores laborales. Si se incluye a Minera del Norte, filial de la siderúrgica, la cifra asciende a 13 mil 907 personas.

Pero los números sólo cuentan una parte de la historia. Detrás de esas cifras están quienes pasaron años trabajando entre hornos, minas y líneas de producción con la expectativa de que el trabajo garantizaría cierta estabilidad. Cuando los hornos ya no produjeron, miles descubrieron que aquella seguridad podía desaparecer sin haber sido consultados.

Cuatro años después, Monclova está esperando una respuesta a la pregunta que trasciende el futuro de la empresa: ¿qué ocurre con la ciudad cuando la industria alrededor de la cual organizó buena parte de su vida económica ya no funciona?

Una vida construida alrededor del acero

La historia de AHMSA en Monclova comenzó en medio de la coyuntura internacional que transformó la industria mexicana. Durante la Segunda Guerra Mundial, la escasez de materiales siderúrgicos llevó al gobierno mexicano y a empresarios a constituir una nueva siderúrgica integrada que garantizara el acero requerido para la industrialización nacional.

De acuerdo con la historia institucional publicada por la propia AHMSA, la decisión de establecer la siderúrgica en Monclova se produjo por su cercanía con los yacimientos de carbón y mineral de hierro, materias primas indispensables para la producción de acero. La empresa fue constituida formalmente en julio de 1942 con participación de capital público y privado; la producción comenzó en 1944. Sin embargo, investigaciones académicas permiten observar que detrás de aquella decisión también se generaron intereses económicos y estratégicos más amplios.

Así, la siderúrgica se integró a la política de sustitución de importaciones del Estado mexicano para activar el desarrollo regional en el centro de Coahuila, a decir del estudio de la *Revista Mexicana de Sociología*.

A su vez, la construcción de AHMSA también estuvo relacionada con los intereses estadounidenses para garantizar la producción, por estar cerca de su frontera durante la Segunda Guerra Mundial. Según la investigación, el ingeniero Harold R. Pape fue enviado a buscar condiciones adecuadas para la producción metalúrgica y las encontró en Monclova: disponibilidad de agua, conexión ferroviaria en el vecino municipio de Frontera

y cercanía con el carbón de la cuenca situada al norte de la ciudad.

Es decir, AHMSA no llegó a Monclova como un proyecto destinado a beneficiar a sus habitantes. La ciudad reunía condiciones estratégicas para la industria que necesitaba materias primas, agua, transporte y fuerza de trabajo.

Después se transformó profundamente a la región: entre 1942 y 1990 AHMSA no sólo fue la principal generadora de empleos locales, alrededor de ella se estableció una cadena de empresas proveedoras cuya estabilidad creció con el funcionamiento de la siderúrgica. Además, permitió consolidar proveedores locales como La Sierrita, S.A.; Construcciones Mecánicas Monclova, S.A.; Refractarios Básicos, S.A. (REBASA); y Fundición Monclova. De esta manera, el impacto económico de Altos Hornos trascendía a sus propios trabajadores: alrededor de su producción se desarrolló una red industrial que vinculó el destino económico de Monclova, Frontera y Castaños al desempeño de la acerera.

Los trabajadores no provocaron esta crisis

La caída de AHMSA tampoco ocurrió de un día para otro; los antecedentes financieros de la crisis pueden rastrearse décadas atrás. El primer antecedente ocurrió en 1999, cuando la siderúrgica debió restaurar una deuda por el desplome internacional del precio del acero y por la crisis financiera asiática.

En este contexto, documentos de la propia compañía muestran que el problema permaneció durante años. En su información financiera correspondiente a 2015, AHMSA reportaba una deuda consolidada de 20 mil 841 millones de pesos (mdp), cuyos 13 mil 488 millones correspondían todavía a deuda de AHMSA en suspensión de pagos. Para septiembre de 2019, AHMSA reportaba pasivos con costos por 982.9 millones de dólares (mdd).



Por años, miles de mineros trabajaron en la planta de AHMSA, ubicada en Monclova, Coahuila; crearon la riqueza que hoy posee la compañía, pero desde 2023 luchan que les sean cubiertos sus pagos y reciban otros beneficios.

Pero la crisis de AHMSA no puede explicarse únicamente por las condiciones del mercado internacional. Detrás de la historia financiera de la siderúrgica aparecen también empresarios, decisiones gubernamentales y una relación con el poder político que atravesó distintas administraciones federales.

Uno de los momentos decisivos ocurrió en 1991, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando AHMSA se privatizó y fue adquirida por Grupo Acerero del Norte (GAN). Sus principales socios provenían de las familias Autrey Maza y Ancira Elizondo.

La operación colocó a dos personajes fundamentales para entender los procesos posteriores al frente de una de las empresas siderúrgicas paraestatales más importantes: Xavier Autrey Maza asumió la presidencia del consejo de administración de Grupo Acerero del Norte, mientras Alonso Ancira Elizondo quedó como vicepresidente del grupo y director general ejecutivo de AHMSA.

Fue vendida por 145 mdd. Entre las condiciones de la operación, los compradores asumieron una deuda de aproximadamente 350 mdd y se comprometieron a invertir otros 535 millones en la rehabilitación y modernización de la siderúrgica.

A ocho años de la privatización, en mayo de 1999, AHMSA se declaró en suspensión de pagos debido a la crisis económica. Sin embargo, la relación entre AHMSA y el poder político salió a relucir de nuevo en la discusión pública años después. Uno de los episodios más importantes ocurrió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando Petróleos Mexicanos, entonces dirigido por Emilio Lozoya Austin, adquirió a AHMSA la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

En 2013 se concretó la operación por 275 mdd. Años después, la compra fue investigada judicialmente. La Fiscalía General de la República sostiene que un dictamen contable determinó un sobreprecio de 216 millones 664 mil dólares

por la adquisición y señaló a Alonso Ancira en la investigación relacionada con la operación.

En esa historia, mientras gobiernos, empresarios, bancos y acreedores negociaban el futuro financiero de la siderúrgica, miles de salarios laborales en Monclova dependían de ella para sostener a sus familias.

Cuando los hornos se apagaron

A finales de 2022 se redujo la producción y, para marzo de 2023 la empresa estaba casi paralizada. La investigación de Martínez Silva y Rojas García recoge testimonios de trabajadores que ni siquiera tenían certeza de que la suspensión terminaría en un cierre prolongado desde aquellos primeros meses. Algunos trabajadores narraron a los investigadores que, si hubieran conocido la gravedad de la situación, habrían intentado ahorrar o preparar su economía.

Pero la crisis ya había comenzado. Cada trabajador que ya no percibió regularmente su salario, significó una



REPORTAJE

32 Ana Velia Maldonado Ramos
✉ @ana_maldon9do

➤ familia con menos recursos. La reducción de sus gastos significó menos ventas para comercios, restaurantes, talleres y prestadores de servicios.

Durante 2023, la incertidumbre salió de las plantas y llegó a las calles de Monclova. Conforme pasaron las semanas sin salario, los trabajadores organizaron protestas, bloquearon accesos a las instalaciones y exigieron respuestas tanto a la empresa como a las autoridades.

La inconformidad tenía otro objetivo: impedir que el patrimonio restante de la siderúrgica desapareciera mientras ellos continuaban sin cobrar. Durante aquellos meses, grupos de trabajadores permanecieron en los accesos de las plantas para evitar la salida de maquinaria, carbón y otros activos de AHMSA.

El reclamo no tardó en llegar al Gobierno Federal. En septiembre de 2023, una comisión de trabajadores viajó hasta la Ciudad de México y entregó una carta en Palacio Nacional solicitando la intervención del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En ese momento, los trabajadores describían la situación de Monclova como una crisis que se había convertido en problemas económicos y dificultades sociales.

En la plaza principal de Monclova también aparecieron mantas dirigidas al Presidente. Trabajadores y extrabajadores exigían apoyo federal para obtener salarios, finiquitos y prestaciones pendientes. El entonces alcalde Mario Dávila se sumó al reclamo y pidió recursos extraordinarios para los afectados, y mecanismos para preservar sus derechos laborales.

La presión situó a AHMSA en la agenda de las conferencias presidenciales. En mayo de 2023, AMLO afirmó que el Gobierno Federal estaba dispuesto a facilitar una reestructuración de los adeudos que la siderúrgica mantenía con instituciones públicas, siempre que llegaran nuevos inversionistas, se invirtiera capital y se garantizara una administración distinta. Calculó

entonces que las obligaciones con el Gobierno oscilaban entre tres mil y cinco mil mdp.

Dos meses después, AMLO reanudó el tema y aclaró que conocía la situación que atravesaba Monclova y sostuvo que su administración buscaba una solución para preservar las fuentes de empleo. La propuesta federal consistía en no condonar las obligaciones de AHMSA, sino permitir que nuevos propietarios las pagaran gradualmente.

Pero AMLO también subrayó una condición política y empresarial: Alonso Ancira debía dejar el control de la siderúrgica y permitir la entrada de nuevos inversionistas.

Por otro lado, el cambio de gobierno estatal no significó el final de la crisis. Manolo Jiménez asumió la gubernatura de Coahuila en diciembre de 2023 y encontró a AHMSA prácticamente paralizada y a sus trabajadores todavía en la incertidumbre. En enero de 2024 calificó el caso como complicado e incierto.

En junio de 2026, incluso el Senado de la República reconoció la dimensión del problema. Una proposición presentada ante la Comisión Permanente advirtió que AHMSA suspendió la producción en diciembre de 2022 y fue declarada en quiebra en 2024, por lo que se acumularon deudas superiores a 61 mil mdp. El documento explicaba, además, que las familias de Monclova llevaban más de cuarenta meses esperando salarios, liquidaciones y otros pagos pendientes.

Para entonces, la discusión sobre AHMSA había atravesado administraciones empresariales, dos gobiernos estatales y dos gobiernos Federales. Habían cambiado los funcionarios, las propuestas de rescate y las rutas jurídicas. Los trabajadores, sin embargo, seguían esperando.

Las voces de AHMSA

Para los trabajadores que dedicaron buena parte de su vida a la siderúrgica, las

consecuencias de esta crisis continúan presentes. Después de casi cuatro años de incertidumbre, la posibilidad de que se concrete la venta de AHMSA representa una esperanza, aunque también despierta el temor de otra decepción.

Alfredo Reyna Saavedra, trabajador de AHMSA e integrante de la representación del Grupo de Defensa Laboral, ha participado en las gestiones emprendidas por los obreros para exigir soluciones a la crisis. En 2024 se integró a las solicitudes de apoyo social y asesoría jurídica presentadas ante autoridades estatales y, posteriormente, participó en reuniones relacionadas con el reconocimiento de los créditos laborales.

Su participación en estos procesos le ha permitido conocer las dificultades que enfrentan sus compañeros, que están esperando una solución que garantice sus derechos laborales. Al referirse a la posibilidad de que un inversionista adquiera la siderúrgica, Reyna Saavedra expresó una esperanza acompañada de cautela: “Esto no es un juego. No creo que él esté jugando”.

El representante obrero también cuestionó a quienes minimizan la situación de los afectados: “A lo mejor es gente que no ha sufrido lo que hemos sufrido nosotros”, lamentó, en referencia a los casi cuatro años transcurridos desde la paralización de la empresa.

Aunque manifestó su deseo de que la oferta prospere, reconoció que los trabajadores no pueden esperar indefinidamente. “Lo que a nosotros nos afecta es el tiempo; porque nosotros ya estamos al límite”, sentenció.

Las palabras de Reyna Saavedra reflejan la situación de una parte de los extrabajadores de AHMSA: la esperanza de recuperar los recursos correspondientes frente al desgaste económico y social acumulado durante años de incertidumbre.

La magnitud del problema se refleja también en las cifras del procedimiento concursal. De acuerdo con los datos recabados para este reportaje, 13 mil



Desde 2023, trabajadores y familiares de la mina Altos Hornos de México en Monclova han protestado para que las autoridades estatales y federales intervengan. La mina se encuentra suspendida hasta que nuevos acreedores la adquieran.

907 extrabajadores de AHMSA y Minera del Norte figuran entre los afectados reconocidos, de los cuales nueve mil 857 corresponden a la siderúrgica.

En septiembre de 2026 se reportó una bolsa de 19 mil 248 mdp correspondiente a créditos laborales. Sin embargo, el reconocimiento de estos adeudos no significa que los trabajadores hayan recibido sus liquidaciones. El pago continúa vinculado al desarrollo del procedimiento concursal y a la realización de los activos en las empresas.

No están perdiendo solamente una empresa. Se está desarticulando una estructura económica, laboral y social construida durante ocho décadas.

El costo de depender de un gigante

Durante 15 años, José Miguel Jaime Aguirre encontró en AHMSA la estabilidad económica que necesitaba para sostener a su familia y construir un patrimonio. Su salario y las prestaciones laborales le permitieron adquirir un terreno, construir una casa y mantener una vida sin dificultades económicas básicas.

Sin embargo, aquella estabilidad desapareció con la paralización de la siderúrgica a finales de 2022. José Miguel recuerda especialmente el destino de su último cheque: lo utilizó para

celebrar los 15 años de su hija. En aquel momento no imaginaba que sería el último salario que recibiría de la empresa a la que había dedicado década y media de trabajo.

La noticia de la suspensión de los pagos llegó a través de los medios de comunicación y de la información proporcionada por el sindicato. Inicialmente, los trabajadores esperaban que se tratara de una interrupción temporal. Se hablaba de esperar algunos meses para conocer nuevas noticias, pero el tiempo transcurrió y la solución no llegó.

¿Cómo cambió su vida desde que dejó de recibir su salario? José Miguel dice que su familia debió apoyarse en los ingresos que obtiene por la renta de un terreno adquirido durante sus años de trabajo en AHMSA. Aunque venderlo podría representar una entrada inmediata de dinero, han preferido conservarlo porque hoy les proporciona recursos mensuales para enfrentar sus necesidades.

Su historia refleja cómo el patrimonio construido durante años de estabilidad laboral se convirtió en un medio para resistir las consecuencias del paro de la empresa que hizo posible adquirirlo.

Pero las consecuencias de la crisis no se limitaron a los trabajadores. También

alcanzaron a sus esposas, hijos y demás integrantes de las familias que dependían directa o indirectamente de la siderúrgica.

Susana Abigail Torres Pérez, esposa de un extrabajador de AHMSA, comparte la preocupación por el futuro económico de Monclova y la falta de oportunidades laborales que enfrentan las familias afectadas. Después de todo este tiempo, ¿qué espera que ocurra con AHMSA y qué considera que todavía les deben la empresa y las autoridades a las familias afectadas?

Susana considera necesario que la siderúrgica se reactive y que se recuperen las fuentes de empleo. También espera que los trabajadores reciban alguna compensación por los años transcurridos, aunque sea parcial, pues la incertidumbre económica orilló a numerosas familias hacia una situación desesperada.

En septiembre de 2026, la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) presentó una oferta de mil 400 mdd para adquirir la siderúrgica; pero la operación permanece sujeta al cumplimiento de requisitos financieros y judiciales. Para miles de trabajadores, la posible venta representa una nueva esperanza, aunque todavía no garantiza el pago de sus derechos laborales ni la recuperación de los empleos perdidos. **b**



**BRASIL
ACOSTA PEÑA**

X @DrBrasilAcosta

GOBIERNO DEL PUEBLO

El domingo 11 de octubre de 2026 se presentó el informe de labores de la presidencia municipal de Tecamatlán, Puebla. Resulta relevante que, por regla general en nuestro país, predomine una visión patrimonialista del poder público. Es decir, quienes llegan a los cargos de elección popular suelen sentarse en la silla edilicia pensando en utilizar la responsabilidad gubernamental para fines estrictamente personales y para la obtención de beneficios propios o del grupo al que pertenecen.

En México es un hecho plenamente conocido que una gran cantidad de políticos ingresan a la administración pública con recursos modestos; sin embargo, al terminar su trienio se convierten en personas ricas y poderosas, cambiando radicalmente su condición socioeconómica. Incluso se recurre con frecuencia al humor popular con bromas conocidas por todos, como aquella en la que un político, al concluir su periodo gubernamental, resulta ser idéntico al nopal: porque cada día que transcurre le salen más y más propiedades.

Es por esta lamentable realidad que los puestos públicos, en términos generales, son profundamente codiciados en la dinámica electoral tradicional. Por esa misma razón, muchos políticos buscan desesperadamente convertirse en candidatos, concibiendo sus campañas electorales no como un compromiso social, sino como una inversión financiera estratégica. Su meta principal consiste en que, una vez alcanzado el poder, puedan recuperar el capital invertido con creces y obtener ganancias sustanciales. No obstante, los miembros del trabajo comunitario y los antorchistas en general no debemos confundirnos ni permitir que estas prácticas manchen la visión del verdadero servicio público.

Los gobiernos revolucionarios impulsados por el Movimiento Antorchista se diferencian sustancialmente de aquellos de corte tradicional. La razón fundamental de esta distinción estriba en que es efectivamente el pueblo organizado el que toma las decisiones determinantes para el

desarrollo integral del municipio; es la propia ciudadanía la que abandera y encabeza la lucha por la consecución de los recursos necesarios. Las comunidades rurales y urbanas señalan, mediante la organización colectiva, precisamente cuáles son las verdaderas prioridades de sus respectivos pueblos, rancherías o colonias. Frente a estas demandas, la autoridad municipal actúa en consecuencia, resolviendo los problemas y ejecutando obras públicas en estricta función de sus posibilidades presupuestales y operativas.

Es sumamente importante destacar que, en el marco del segundo informe de gobierno del municipio de Tecamatlán, se contó con la valiosa presencia de quienes precedieron la responsabilidad ejecutiva al actual alcalde. En un acto con profundo significado político y social, estuvieron presentes los expresidentes municipales Ramiro Hernández Merino, Julio César Córdova Merino, Pedro Domínguez Vázquez, Marco Antonio Morán Salas, Nibardo Hernández Sánchez, Concepción Muñiz Escalona, Manuel Melchor Merino Muñiz, Inés Córdova Aguilar, Sara Yolanda Reyes Hernández y Araceli García Carreón.

Esta confluencia representa una muestra contundente de unidad institucional y de continuidad histórica que refrenda, ante la ciudadanía, el compromiso indeclinable que los funcionarios públicos de Tecamatlán mantienen con el bienestar de su gente. Si Tecamatlán ha logrado desarrollarse sostenidamente durante décadas y si ha sido posible dar un seguimiento puntual al progreso material, social, académico y cultural de la región, se debe fundamentalmente a que tanto los exalcaldes como el actual presidente municipal, Avelino Cándido Rivera Campos, han sido plenamente respaldados y avalados por el pueblo. De la misma manera, la propia ciudadanía les exige día con día que cumplan cabalmente con los altos intereses y las aspiraciones de progreso municipal.

Resulta indispensable destacar que, en Tecamatlán, el pueblo gobierna realmente. La organización consciente y activa

de los ciudadanos constituye el pilar fundamental para garantizar que no se pierda nada de lo que hasta ahora se ha edificado con esfuerzo colectivo. He sabido con preocupación que existen actores e intereses que, tras presenciar los cuantiosos avances alcanzados por la comunidad, pretenden utilizar tramposamente el discurso de la “democracia” para apoderarse de la conducción política de Tecamatlán, pero se sitúan al margen del pueblo organizado. Por ello debo alertar clara y oportunamente a todos los tecomatecos: si el poder público llegase a caer en manos de intereses oscuros que no están pensando en las verdaderas necesidades de las mayorías, entonces se pondría en grave riesgo todo el patrimonio social y la infraestructura lograda durante años de lucha incansable.

La historia de Tecamatlán no se puede entender sin la entrega abnegada de sus hombres y mujeres, que convirtieron un rincón olvidado de la Mixteca poblana en un verdadero modelo de desarrollo, equidad y progreso social. En este municipio, las obras de infraestructura básica, los centros educativos de todos los niveles, las instalaciones deportivas de primer nivel y la oferta cultural no han caído del cielo ni han sido concesiones gratuitas del poder central. Todo lo que hoy engalana a Tecamatlán es el fruto directo de la gestión colectiva, las marchas, comisiones de presión y de la firme determinación por no ceder ante las injusticias.

Por esta razón, la llegada de políticos que desconocen la trayectoria de organización popular representa un peligro real para la estabilidad y el crecimiento del municipio. Quienes hoy pretenden ostentarse como salvadores o promotores de una “democracia abstracta” son los mismos que ignoraron las carencias del pueblo en el pasado o que ven en la administración pública una oportunidad para el enriquecimiento personal. La democracia verdadera no consiste simplemente en depositar un voto en las urnas cada tres años para luego dejar la toma de decisiones en manos de un pequeño grupo de privilegiados. La verdadera democracia, como se ejerce diariamente en Tecamatlán, es la democracia participativa, donde la comunidad discute, fiscaliza, trabaja y determina el rumbo de los recursos públicos.

Es vital que la juventud tecomateca, las nuevas generaciones que cecieron disfrutando escuelas de calidad, villas estudiantiles, campos deportivos y un entorno seguro, comprendan las raíces de este proyecto. Ningún avance es permanente si no se cuida con celo defensivo; los logros acumulados pueden desmantelarse rápidamente si se permite que la apatía o la desinformación abran paso a gobiernos improvisados o serviles a intereses ajenos al bienestar común. La continuidad del progreso en Tecamatlán exige el fortalecimiento de las asambleas, el trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanos, y una vigilancia permanente sobre la honestidad de la gestión pública.

El ejemplo que Tecamatlán ofrece al estado de Puebla y a toda la República Mexicana es contundente: cuando el pueblo se organiza, educa y toma la conducción de su propio destino en sus manos, la transformación social deja de ser una promesa de campaña para convertirse en una realidad palmaria y cotidiana. Mantener la unidad, respaldar a sus autoridades legítimas y defender el proyecto de desarrollo integral son los deberes primordiales del presente para asegurar el futuro de las próximas generaciones. **b**

La llegada de políticos que desconocen la trayectoria de organización popular representa un peligro real para la estabilidad y el crecimiento del municipio. Quienes hoy pretenden ostentarse como salvadores o promotores de una “democracia abstracta” son los mismos que ignoraron las carencias del pueblo en el pasado o que ven en la administración pública una oportunidad para el enriquecimiento personal. La democracia verdadera no consiste simplemente en depositar un voto en las urnas cada tres años para luego dejar la toma de decisiones en manos de un pequeño grupo de privilegiados. La verdadera democracia, como se ejerce diariamente en Tecamatlán, es la democracia participativa, donde la comunidad discute, fiscaliza, trabaja y determina el rumbo de los recursos públicos.

LICENCIADO EN ECONOMÍA POR LA UNAM. GANADOR DEL 4º CONCURSO DE ENSAYO POLÍTICO “JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU”. SUS TEMAS DE INTERÉS SON POBREZA, DESIGUALDAD, POLÍTICA PÚBLICA Y DESARROLLO ECONÓMICO.



**ROGELIO GARCÍA
MACEDONIO**
 @RogelioGM10

CHAPULINEO POLÍTICO Y ORGANIZACIÓN POPULAR

Antes de abordar el tema de esta ocasión, quiero expresar mi solidaridad con los compañeros del Movimiento Antorchista Nacional que han denunciado amenazas y hostigamiento en distintas partes del país: con el profesor Jerónimo Gurrola Grave, dirigente en Querétaro, a quien han amenazado de muerte; con los compañeros de Oaxaca, que piden que cese la intimidación en su contra; con los compañeros de Veracruz, contra quienes se emitieron citatorios judiciales para comparecer el mismo día de una movilización anunciada; y con los compañeros del Estado de México, que han rechazado categóricamente las calumnias que los vinculan con la ocupación de terrenos de la Universidad Autónoma Chapingo en Río Frío, Ixtapaluca. No quiero extenderme sobre estos casos; sólo quiero decir que es necesario seguir vigilantes, atentos, organizados y listos para la lucha política. Nuestra tarea nunca ha sido fácil, pero debemos seguir firmes en ella: educar y organizar al pueblo de México.

Están en puerta las elecciones de 2027, en las que se elegirán 20 mil 109 cargos de elección popular. Destacan 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y mil 98 diputaciones locales. En este escenario, el partido Morena va adelante en el proceso, pues ya ha elegido a quienes llama “coordinadores estatales de defensa de la transformación” en las 17 gubernaturas en disputa, un eufemismo para designar a los candidatos antes de que la ley electoral lo permita. En este proceso, a muchos mexicanos les parece inadmisibles que personajes que antes eran acérrimos enemigos de Morena en el discurso, o que pertenecían a los partidos denominados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como el PRIAN, sean ahora los abanderados del partido en el poder para competir por las gubernaturas. Esta práctica no es nueva y, en el ingenio mexicano, se le conoce como “chapulineo político”.

Para entender por qué, hay que comprender la relación que se establece entre quienes tienen el poder económico y quienes gobiernan. En 1859, Carlos Marx mostró al mundo uno de sus descubrimientos: la relación entre la estructura económica de

la sociedad y sus formas jurídicas y políticas. Dicho de otra manera, la forma en que se organiza la sociedad para producir los bienes materiales que necesita para vivir determina sustancialmente las relaciones jurídicas y políticas que imperan en ella. Es decir, quién posee los medios con los que se produce la riqueza, quién trabaja y quién decide sobre el resultado de ese trabajo determinan cómo se configuran, en primer lugar, el Estado y, en segundo lugar, el gobierno como parte de éste.

En las sociedades divididas en clases sociales, son las clases poseedoras de los medios de producción las que detentan el poder económico y el poder político, pues configuran el Estado y el gobierno. Esa clase dominante decide qué aparato jurídico se configura y controla las leyes, los jueces, las cárceles, la fuerza pública, etcétera. Todo ello adquiere su forma ejecutiva en el gobierno; es decir, es el gobierno el que decide cómo y cuándo se usa ese poder estatal. El Estado es una institución que sirve a la clase dominante para someter a las clases que no poseen los medios de producción y tienen que trabajar para quienes sí los poseen. Es esa condición desigual, configurada a lo largo de la historia, la que justifica la creación y la existencia de ese Estado como instrumento de represión.

Ahora bien, en la sociedad existen varias clases sociales, y éstas participan en la constitución del gobierno, hoy generalmente a través de lo que se llama democracia. Pero esta democracia se limita a la participación de toda la población cuando se trata de ejercer el voto. De la elección de los candidatos y de sus programas de acción no se ocupa la inmensa mayoría de la sociedad, sino sólo una parte “educada e instruida” en los términos que convienen a los intereses de la clase dominante. Cuando alguna expresión de organización popular asoma y pretende realizar acciones que combatan de raíz la desigualdad económica —como mejores salarios, mejores condiciones de vida para los trabajadores, políticas que limiten las ganancias económicas de las empresas o, en una palabra, una distribución más equitativa de la riqueza—, el tan aclamado sistema democrático deja de ser funcional para los poseedores de los medios

de producción y, en muchos casos a lo largo de la historia, se convierte en un sistema de gobierno dictatorial para evitar que sus intereses sean tocados. Así se explica que los gobiernos, a lo largo de la vida democrática de México, prometan el paraíso a los electores más necesitados de soluciones pero que, una vez en el poder, sean incapaces de cumplir esas promesas. Ésa ha sido la mística desde los gobiernos de la Revolución Mexicana hasta la actual Presidencia de la República.

Observen algo elemental: un trabajador y un empresario pueden tener, cada uno, un voto. Pero el empresario decide sobre inversiones, empleos y recursos con los que el trabajador no cuenta; dispone de asesores, abogados, relaciones públicas —palancas, en lenguaje coloquial— y tiempo para defender sus intereses. El trabajador sale de madrugada, cumple su jornada y llega a su casa con la preocupación de completar el gasto. Ambos son ciudadanos iguales ante la ley, pero sus posibilidades de influir en el gobierno son muy diferentes.

El Estado no es una institución neutral que defienda por igual a todos los mexicanos, ni la democracia burguesa es la panacea que proclaman sus panegiristas. Ambos son instrumentos de dominación de una clase poseedora de los medios de producción sobre quienes están desposeídos de ellos. Una sociedad puede celebrar elecciones y reconocer libertades mientras conserva relaciones económicas que subordinan a la mayoría trabajadora a quienes concentran la propiedad; la dominación se ejerce conservando esas relaciones, protegiéndolas y presentándolas como si fueran el orden natural de las cosas. De ahí que renovar gobernantes no cambie radicalmente los problemas de los desposeídos; sólo podrá hacerlo un cambio de clase en el poder. Para ser más claros: sólo si los trabajadores, que ahora no poseen medios de producción, entienden el problema y su importancia económica en la sociedad y se organizan para gobernar el país, podrán resolver verdaderamente sus problemas de raíz.

Por eso, las elecciones tampoco son totalmente inútiles. Los trabajadores pueden usarlas como vía para acceder al poder político, con la condición de que estén organizados y tengan claros los objetivos que se plantean para construir una sociedad mejor. Esto también es una expresión de la lucha de clases: es una lucha política. Precisamente porque hay lucha, la organización popular puede pelear por el poder del Estado y conquistarlo; es decir, puede tomar el poder político.

Llegamos entonces a la cuestión que interesa a los trabajadores: ¿qué hacer? Si quienes tienen el poder económico siguen decidiendo a través de los partidos y seleccionando aspirantes, y si los gobiernos continúan tomando decisiones mayoritariamente a favor de las clases dominantes, los trabajadores no deben dejarles todo el terreno, porque esas decisiones repercuten en la vida diaria de todos los que vivimos en sociedad: se decide sobre la jornada laboral, el salario, los servicios, los impuestos, el ejercicio del presupuesto, las leyes, etcétera. La política entra

todos los días en la casa del trabajador, aunque él haya decidido no ocuparse de ella. Por eso, los trabajadores necesitan organización propia, educación y un programa que responda a sus intereses, no a los de las clases dominantes.

La organización de los trabajadores tiene que formar personas que comprendan, discutan y decidan sobre su futuro colectivo. Así, los trabajadores comprenderán que su fuerza radica tanto en su número como en el papel indispensable que desempeñan en la producción de bienes en el país. Hace falta estudiar política, sí, pero también historia, economía, ciencia, literatura y arte. Los trabajadores deben acceder a esta formación, pues una clase trabajadora educada, que aprende a pensar, puede examinar una promesa, preguntar de dónde saldrá el dinero, advertir quién le miente y quién no, e identificar con mayor certeza a su enemigo de clase: la burguesía. Si la clase trabajadora adquiere esa capacidad, sus integrantes podrán gobernarse a sí mismos; pero, para que eso ocurra, es necesario que, en principio, sus miembros más avanzados se dediquen a educar y organizar a los trabajadores. No hay de otra: es un camino difícil, pero los problemas difíciles exigen soluciones difíciles. ¿Y pueden los trabajadores gobernar? Pueden prepararse para hacerlo y existen antecedentes de ello: la Comuna de París de 1871 y la Revolución rusa de 1917.

Por todo lo anterior, no debe sorprendernos que los políticos salten de un partido a otro como chapulines. Cambian de siglas, de colores y de discursos, pero no de los intereses esenciales que representan. Por eso pueden pasar del PAN al PRI, del PVEM a MC, del PT a Morena o recorrer el camino inverso: todos son expresión política de las clases dominantes que, pese a sus disputas y diferencias circunstanciales, terminan poniéndose de acuerdo cuando se trata de gobernar para garantizar la continuidad de sus privilegios. Frente a ellos, la tarea de quienes buscan transformar esta realidad desde la raíz no admite atajos: hay que educar, organizar y preparar políticamente a los trabajadores, hasta convertir su fuerza social en una fuerza capaz de disputar el poder y construir una sociedad verdaderamente justa y equitativa. **b**

No debe sorprendernos que los políticos salten de un partido a otro como chapulines. Pueden pasar del PAN al PRI, del PVEM a MC, del PT a Morena o recorrer el camino inverso: todos son expresión política de las clases dominantes que, pese a sus disputas y diferencias circunstanciales, terminan poniéndose de acuerdo cuando se trata de gobernar para garantizar la continuidad de sus privilegios.

LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNAM, MAESTRO EN CIENCIAS JURÍDICO-PENALES POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES, CONSEJERO JURÍDICO DE LA DEFENSORÍA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES Y ASESOR SINDICAL.



**EVERARDO
LARA**

X @EverardoLaraC

ACERCA DEL CONFLICTO EN VOLKSWAGEN

La revisión salarial en la empresa Volkswagen de Puebla puso al descubierto la política antiobrera de los patrones que decidieron ofrecer un incremento del 10.04 por ciento global, pero a cambio de eliminar el tercer turno de producción de las líneas *Jetta* y *Tiguan*, lo que significa el despido de más de 780 trabajadores sindicalizados. Aunque en un primer momento la empresa y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW) habían anunciado que ya existía un “acuerdo” de solución, lo cierto es que, el pasado 11 de septiembre, los trabajadores rechazaron dicha propuesta. De modo que en Volkswagen de Puebla se está librando una inevitable lucha entre los dueños del capital y los trabajadores.

Este conflicto laboral en la planta de Volkswagen en Puebla no es un hecho aislado, sino la manifestación directa de la reestructuración global y financiera que atraviesa la corporación alemana que, ante el desplome de sus ingresos a nivel mundial, ha resuelto contener los incrementos salariales y despedir a miles de trabajadores.

Por consiguiente, debemos tener claro que la empresa Volkswagen (VW) está enfrentando una severa crisis económica en virtud de la estrepitosa caída de sus ventas a nivel mundial y, por tanto, con el objetivo de mantener sus márgenes de ganancia, los dueños del capital han implementado un recorte masivo de personal. La compañía ha registrado caídas drásticas en sus entregas globales durante este tercer trimestre, “su caída más acusada en los últimos cuatro años (...) Las entregas, un indicador de las ventas que se sigue muy de cerca, cayeron hasta los 1.89 millones de vehículos en el trimestre” (*El Economista*, 12 de octubre 2026). Y para contener dicha crisis ha diseñado un riguroso plan de austeridad y ahorro financiero.

Por primera vez en su historia, prevé el cierre definitivo en cuatro de sus principales plantas automotrices en Alemania: Emden (productora de vehículos eléctricos con más de ocho mil trabajadores); Zwickau (principal centro de ensamblaje

de autos eléctricos con cerca de nueve mil trabajadores); Hannover (sede de producción de vehículos comerciales eléctricos con cerca de 14 mil trabajadores); y Neckarsulm (planta de Audi para modelos de combustión, híbridos y eléctricos, con más de 15 mil trabajadores).

En total se proponen eliminar más de 100 mil puestos de trabajo en el mundo, principalmente en Alemania, precipitando la salida de más de 35 mil trabajadores mediante la adecuación forzada de jubilaciones anticipadas y rescisiones “voluntarias”. Y, entre otras medidas, está proyectando reducir a la mitad su oferta de modelos y disminuir su producción global de 12 a nueve millones de vehículos por año.

¿Cómo se explica esta crisis económica que sufre en Alemania y el mundo entero la otrora poderosísima corporación Volkswagen? Principalmente por la contracción en la venta de autos en el mercado chino y, adicionalmente, debido a los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos en la importación de vehículos.

Durante décadas, Volkswagen fue la empresa líder en la producción mundial de automóviles, incluso, en 1984 se convirtió en el primer fabricante extranjero en asociarse con una empresa estatal china para producir vehículos exclusivos que se ajustaron a las condiciones y necesidades de su población, logrando construir una gigantesca red de plantas de producción con cientos de miles de trabajadores. Volkswagen se incorporaba así al mercado chino con una población superior a los mil 400 millones de habitantes, una de las más grandes del planeta.

En China, las ganancias de Volkswagen “crecieron de 395 millones de euros en 2008, a 831 millones de euros en 2009, a mil 907 millones de euros en 2010 y a dos mil 616 millones de euros en 2011; para llegar, en 2012 a dos mil 806 millones de euros. En total, en el año 2012, el consorcio Volkswagen tenía un volumen de ventas de 160 billones de euros y obtuvo ganancias por 16 billones de euros” (*buzos* de la noticia, cinco de octubre 2026).

Sin embargo, la realidad económica, política y social está en permanente movimiento. Los fabricantes de automóviles chinos como BYD (Build Your Dreams/ Construye tus sueños), el mayor fabricante de autos eléctricos en el mundo, están irrumpiendo no sólo en el mercado local, sino también en el mercado mundial con vehículos de tecnología mucho más avanzada y con precios altamente competitivos. Fue por esta razón que las ventas de Volkswagen se desplomaron y con ellas su histórico liderazgo en el mercado.

Por si esto fuera poco, la imposición de aranceles estadounidenses del 15 por ciento para autos procedentes de Europa y de hasta 27.5 por ciento para aquellos fabricados en su planta de Puebla, en México, redujo drásticamente sus ganancias y obligaron a la empresa a disminuir su producción.

Por consiguiente, la situación que sufren los trabajadores de Volkswagen en Puebla está sujeta a la problemática que enfrenta toda la industria automotriz en el mundo. Una industria cuya importancia económica en la sociedad contemporánea presenta una abierta contienda por alcanzar la supremacía tecnológica, en donde el debilitado imperialismo norteamericano se ve obligado a implementar políticas proteccionistas arancelarias; una contienda por lograr la reestructuración de las cadenas de producción y suministro, así como el control de la manufactura de componentes eléctricos; una disputa que finalmente forma parte de la lucha por el establecimiento de un nuevo orden mundial, es decir, la lucha por la conservación de un anacrónico mundo unipolar dirigido por el criminal imperialismo norteamericano, o bien, la conformación de un mundo multipolar encabezado por China y Rusia.

Cabe recordar que, a partir de 1991, tras la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el imperialismo norteamericano impuso un sistema unipolar para mantener su hegemonía económica, política y militar en el planeta entero, sin embargo, en los primeros años del Siglo XXI, un grupo de países desarrollados que se denomina BRICS (cuyo nombre corresponde a las iniciales de los cinco primeros Estados miembros: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) de manera natural fue fraguando una alternativa económica y geopolítica que aglutina a los pueblos de los países que reclaman respeto a su soberanía, a sus recursos naturales y, en consecuencia, propone un sistema económico mundial multipolar basado en la cooperación y el respeto entre las naciones.

Es en el marco de esta disputa económica por definir el nuevo orden mundial entre Estados Unidos y China que se inscribe también el avance tecnológico y comercial de la industria automovilística en el mundo. Y, sin duda, China está ganando la partida.

La industria automotriz transita aceleradamente del motor de gasolina o diésel hacia la conversión del automóvil eléctrico, requiriendo para ello componentes tecnológicos

centrados en la industria electrónica, eléctrica e informática, esto significa, por ejemplo, que las nuevas baterías para autos eléctricos representan más del 60 por ciento del costo del vehículo, cuyos principales componentes son las tierras raras, el litio, el grafito y el cobalto. Recursos naturales que el imperialismo norteamericano y sus aliados están dispuestos a obtener a sangre y fuego. Y también está otro tipo de componentes tecnológicos como lo es el *software*, que se ha convertido en el núcleo operativo que controla el vehículo y lo dota de sistemas “inteligentes” de seguridad, actualización y navegación.

Así las cosas y ante la incertidumbre que enfrentan cientos y miles de trabajadores de Volkswagen, los sindicatos deberían aparecer como un instrumento de lucha y defensa de los trabajadores en contra de la explotación capitalista; como un contrapeso para contener las políticas antiobreras de la empresa; sin embargo, quienes están pagando los “platos rotos” de la crisis económica que viven los patrones de la Volkswagen, siguen siendo los trabajadores: el cierre del tercer turno y el consecuente despido de más de 780 trabajadores revelan que el sindicato está más preocupado por aplicar de manera tersa el recorte masivo de personal para evitarle sobresaltos a la empresa que en defender los genuinos intereses de sus agremiados.

La unidad y cohesión de los trabajadores, su capacidad de movilización y combatividad para sacudirse al charrismo sindical y convertirse en una verdadera fuerza de oposición que enfrente a los patrones, son factores fundamentales que habrán de contribuir no sólo a frenar en lo inmediato el despido masivo de trabajadores, sino una fuerza social que tarde o temprano tendrá que asumir una posición resuelta en la construcción de un nuevo orden mundial. **■**

Los sindicatos deberían aparecer como un instrumento de lucha y defensa de los trabajadores en contra de la explotación capitalista; como un contrapeso para contener las políticas antiobreras de la empresa; sin embargo, quienes están pagando los “platos rotos” de la crisis económica que viven los patrones de la Volkswagen, siguen siendo los trabajadores: el cierre del tercer turno y el consecuente despido de más de 780 trabajadores revelan que el sindicato está más preocupado por aplicar de manera tersa el recorte masivo de personal para evitarle sobresaltos a la empresa que en defender los genuinos intereses de sus agremiados.


**ABOLFAZL
PASANDIDEH**

X @IraninMexico

LA HISTORIA: UN PUENTE HACIA LA PAZ, NO UN INSTRUMENTO DE ODIO

La historia es la memoria compartida de la humanidad, no un arsenal para las disputas políticas del presente. Cuando un dirigente habla sobre las civilizaciones desde un escenario histórico, asume una responsabilidad que trasciende la política cotidiana: ser fiel a la verdad y evitar sembrar enemistad entre los pueblos. Invocar a Jerjes y las guerras entre Persia y Grecia para construir una imagen denigrante de los iraníes no constituye un ejercicio de comprensión histórica, sino un uso selectivo del pasado.

Irán, una tierra cuyas raíces civilizatorias se remontan a más de cinco mil años, no puede reducirse a unas cuantas escenas de guerra ni a relatos unilaterales. Los vestigios de Susa y de otros centros de esta antigua civilización dan testimonio de su prolongada contribución al desarrollo de la vida urbana y la cultura humana. Ningún discurso político puede reducir semejante patrimonio a una imagen de saqueo y destrucción.

El gobierno de un país que apenas cuenta con 250 años de existencia debería acercarse a esa profundidad histórica con humildad, no como si fuera el tutor de las civilizaciones. Desde luego, la antigüedad no otorga, por sí sola, superioridad moral; tampoco el poder económico o militar concede a ningún gobierno el derecho a denigrar a otros. La credibilidad se sustenta en la honestidad con la que se examina el pasado y en la responsabilidad que se asume por los actos del presente.

Si hemos de hablar del legado aqueménida, ¿por qué detenernos únicamente en las guerras y omitir a Ciro? El Cilindro de Ciro, conocido como la «primera declaración de derechos humanos», hace referencia al retorno de poblaciones desplazadas y a la restauración

de santuarios. Aunque no debemos trasladar sin matices los conceptos jurídicos contemporáneos al mundo antiguo, este documento ocupa un lugar valioso en la reflexión sobre la tolerancia y el respeto a distintas creencias.

Persépolis tampoco representa únicamente esplendor arquitectónico. Sus registros administrativos ofrecen testimonios del pago de salarios y del suministro de alimentos a trabajadores y artesanos. Estas evidencias cuestionan la visión simplista que atribuye todos los grandes monumentos de la Antigüedad exclusivamente al trabajo de personas esclavizadas. Comprender la civilización iraní exige considerar también estos documentos, en lugar de repetir solamente los relatos que resultan útiles para la confrontación política.

Pero la pregunta fundamental no se refiere únicamente al pasado. ¿Con qué autoridad moral una potencia que lleva en su historial el uso de bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki —cuyos bombardeos evocan la tragedia humana del empleo de armas nucleares y las consecuencias devastadoras de las decisiones políticas y militares— se erige en juez de la destrucción causada por otros? Esos dos nombres siguen recordando un sufrimiento que ninguna pretensión de superioridad civilizatoria puede borrar de la memoria de la humanidad. Hablar de ética exige, ante todo, el valor de examinar la propia trayectoria.

En nuestros días, el nombre de Minab también se ha convertido en una dolorosa interpelación a la conciencia del mundo. El ataque del 28 de febrero de 2026 contra la escuela Shajareh Tayyebbeh arrebató la vida a numerosos niños y otros civiles; los reportes oficiales señalaron un saldo de 168 personas fallecidas. Una investigación de la agencia Associated Press, sustentada en imágenes y evidencia satelital, señaló la

responsabilidad de la potencia atacante y documentó su negativa a reconocerla y a publicar íntegramente los resultados de la investigación. Las familias de las víctimas merecen verdad, justicia y respuestas claras.

Quien retrocede dos mil quinientos años para condenar la destrucción debe ser capaz de responder también por la devastación de una escuela en su propio tiempo. Si la protección de la infancia es un valor humano, no puede depender de la geografía, la nacionalidad o la conveniencia política. La autoridad moral no se obtiene mediante discursos: se construye asumiendo responsabilidades y demostrando respeto por la vida humana.

Los avances tecnológicos y la creciente capacidad de registrar y difundir pruebas han hecho más difícil monopolizar los relatos. Hoy, una imagen, el testimonio de un sobreviviente o una investigación independiente pueden cuestionar la versión oficial de quienes ostentan el poder. La tecnología no significa, por sí misma, el fin del engaño; tampoco se puede considerar a la opinión pública como una audiencia pasiva que acepta cualquier mensaje propagandístico como verdad por el simple hecho de escucharlo repetidamente. La propaganda imperialista tampoco está exenta de esta crítica y este escrutinio.

Para el público mexicano, la importancia de respetar la memoria histórica y la dignidad de los pueblos resulta especialmente comprensible. Ninguna sociedad acepta que otra, amparada en su poder, pretenda redefinir su historia y su identidad. El mismo respeto que exigimos para nuestra cultura y nuestra independencia debemos reconocerlo a las demás naciones.

Los iraníes y los griegos de hoy son herederos de dos grandes civilizaciones; no están condenados a repetir las guerras de la Antigüedad. Entre ambos pueblos hay espacio para hablar de filosofía, arte, ciencia, turismo y amistad. Honrar a Grecia no requiere denigrar a Irán, del mismo modo que sentir orgullo por Irán no exige menospreciar a ninguna otra civilización.

La responsabilidad de la diplomacia es abrir caminos hacia el futuro. En lugar de desenterrar enemistades del pasado, debemos propiciar el conocimiento mutuo y el acercamiento entre los pueblos. Para hacer frente a la guerra, la pobreza y las crisis compartidas, la humanidad necesita cooperación, no una nueva división del mundo entre civilizaciones merecedoras de respeto y pueblos destinados al desprecio.

El odio engendra odio; cultivar el afecto y el respeto fortalece la amistad y la cercanía entre las naciones. Si hemos de aprender una lección de la historia,

que sea la necesidad de la paz. La verdadera grandeza de una civilización no reside únicamente en los monumentos que ha legado, sino también en lo que hace hoy para proteger la dignidad humana y construir un futuro compartido. **b**

Pero la pregunta fundamental no se refiere únicamente al pasado. ¿Con qué autoridad moral una potencia que lleva en su historial el uso de bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki —cuyos bombardeos evocan la tragedia humana del empleo de armas nucleares y las consecuencias devastadoras de las decisiones políticas y militares— se erige en juez de la destrucción causada por otros? Esos dos nombres siguen recordando un sufrimiento que ninguna pretensión de superioridad civilizatoria puede borrar de la memoria de la humanidad. Hablar de ética exige, ante todo, el valor de examinar la propia trayectoria.



✕ McasiqueOlivos

Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Ordenar la ciudad a costa del patrimonio social

El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México ha despertado la preocupación de habitantes de la CDMX por sus posibles efectos en el incremento de la propiedad privada. Desde que comenzó la consulta pública, el pasado 24 de septiembre, surge una pregunta: ¿el gobierno aumentará el predial para obtener más recursos?

La jefa de Gobierno Clara Brugada asegura que no habrá incrementos al impuesto. Por su parte, el secretario de Planeación, Enrique Irazoque, sostiene que el programa no puede, por sí mismo, aumentar el predial, modificar los usos de suelo ni ordenar subastas de propiedades. Sin embargo, estas declaraciones no han disipado las dudas sobre el alcance del documento que contiene el Programa de Ordenación. Diputados de Morena en el Congreso capitalino incluso anunciaron que buscarían modificarlo para evitar interpretaciones que generen incertidumbre.

El gobierno justifica el proyecto por la necesidad de coordinar el transporte, el servicio de agua, la vivienda y los servicios de una metrópoli de casi 23 millones de habitantes. Pero detrás de la planeación urbana existe una cuestión que las autoridades no han aclarado: cómo financiarán las obras y quiénes asumirán sus costos.

El programa no establece un aumento automático del predial, pero eso no elimina el riesgo de que los propietarios terminen pagando más. La actualización de los valores catastrales puede elevar la base sobre la que se calcula el impuesto; y si ese ajuste se refleja en el cobro, las familias obtendrían recibos más caros. Así, el gobierno podría sostener que no creó un nuevo gravamen mientras los ciudadanos enfrentan pagos más altos.

La recuperación de plusvalía también está en el centro de la controversia. Este mecanismo busca captar parte del valor agregado a los terrenos generado por obras públicas o cambios en su aprovechamiento. Aunque sus defensores argumentan que los propietarios deben contribuir cuando se benefician de la inversión pública, su aplicación exige reglas claras para evitar cobros desproporcionados. Sin esas garantías, la medida puede convertirse en otra vía para aumentar la recaudación a costa de los habitantes.

Las consecuencias serían especialmente difíciles para las familias con ingresos limitados. Un jubilado que vive en una casa cuyo valor aumentó por la transformación de su colonia, podría pagar más predial sin que su pensión se haya incrementado. Lo mismo ocurriría con familias que

han dedicado años a pagar una vivienda y que tendrían que destinar más dinero a conservarla. Que el valor de una propiedad aumente no significa que sus dueños dispongan de recursos para cubrir mayores impuestos.

Los efectos también podrían llegar al mercado inmobiliario. Si los desarrolladores deben pagar más por cambios de uso de suelo o por aprovechar sus terrenos, podrían trasladar esos costos al precio de las viviendas y las rentas. En una ciudad donde acceder a una casa ya representa una dificultad para numerosas familias, encarecer la construcción puede agravar el problema; aunque el impacto dependerá de cómo se apliquen las medidas.

La incertidumbre alcanza a quienes habitan terrenos sin regularizar. Durante la consulta, habitantes de Xochimilco expusieron el caso de 250 familias de la zona chinampera que llevan 27 años realizando trámites sin obtener respuesta. Para ellas, las referencias a predios infrautilizados y a posibles mecanismos de intervención sobre la propiedad —como señala el documento— generan temor, pues todavía no poseen certeza jurídica sobre sus terrenos.

Los críticos también han advertido disposiciones relacionadas con la plusvalía, los cambios de uso de suelo y las posibles ventas forzosas. Su alcance debe evaluarse conforme al documento y la legislación aplicable, pero las autoridades no pueden reducir las preocupaciones a simples malentendidos. Si el proyecto deja dudas sobre la protección del patrimonio, corresponde al gobierno corregirlo.

La consulta concluirá el 24 de noviembre. Antes de esa fecha, las autoridades deben explicar si actualizarán los valores catastrales, cómo impedirán que esos cambios eleven el predial y qué protección tendrán los adultos mayores y las familias de menores ingresos. También deben precisar el destino de los recursos que pretendan recaudar.

Ordenar la ciudad es necesario, pero no puede convertirse en una justificación para imponer mayores cargas a sus habitantes. Mientras el gobierno no establezca garantías por escrito, el compromiso de que el predial no aumentará, será insuficiente. Por el momento, querido lector, es todo **b**





El penoso ingreso de los hogares

La vida en los hogares mexicanos dista mucho de la supuesta felicidad que, según el gobierno del bienestar, priva a lo largo y ancho del país. El ingreso que reciben los hogares por la venta de su fuerza de trabajo, o porque son beneficiarios de algún programa social, resulta insuficiente. Se ha difundido mediante diversos análisis y estudios que nadie sale de la trampa de pobreza por estas vías. El salario mínimo, aun cuando se reporte que ha aumentado, en los hechos, no tiene tales incrementos: en primer lugar, porque no vigilan a las empresas para que realmente se efectúe; y en segundo lugar, porque el 98 por ciento de las empresas en México son tan pequeñas, la mayoría labora en la informalidad, que no pueden sufragar tales aumentos, aunque quisieran.

Aun cuando el gobierno no actualice sus datos estadísticos, las cifras creíbles pertenecen a 2018; y las actuales han empeorado porque, en estos ocho años de gobierno morenista, la economía viene en caída libre; y sin un crecimiento económico, las buenas intenciones sólo quedan en discurso demagógico; aun cuando las cifras “se maquillen”, la población sigue vulnerable en relación con el empleo: 33 millones de trabajadores están en situación económica informal, y más de 11 millones de trabajadores no alcanzan el salario mínimo.

Mientras un trabajador formal gana 13 mil pesos mensuales en promedio, los que se emplean en el sector informal no alcanzan los siete mil. Para los deciles más bajos, la sobrevivencia diaria representa un verdadero predicamento. Los gastos de los hogares están al día; aunque en promedio hay cuatro miembros por familia, entre más pobre, la prole es más numerosa, en muchos casos con más de siete integrantes.

Los gastos diarios orillan a las familias a hacer malabares para estirar el ingreso; esta necesidad obliga a que la esposa o los hijos mayores se incorporen al mercado laboral, además del jefe de familia. Sus ingresos no

alcanzan para cubrir los gastos que parecen “un barril sin fondo”: se gasta en las necesidades primarias, como alimentos y, si alcanza, algo de ropa y calzado. El ingreso nos recuerda quiénes somos, aunque no se quiera o no se acepte, porque éste determina todos los aspectos de la existencia. La vida se muestra tal cual es, desde el nacimiento hasta la muerte.

Por ejemplo, la precariedad del hogar, el hacinamiento, la desnutrición de la madre son las primeras cosas que descubre el niño en los hogares más humildes; pertenecen al mundo de oportunidades que más tarde le venderán: desde que nace ya está en desventaja, no alcanza ni el peso promedio de un bebé normal; desde ahí, el mundo se muestra como una selva donde hay que sobrevivir. Para los estratos más bajos, el ingreso apenas alcanza para malcomer: alimentos chatarra o inferiores como refrescos, botanas, frijoles, arroz, tortillas serán su dieta diaria; por ello, las enfermedades relacionadas con la pobreza acuden en tropel, causando estragos y muerte en las primeras etapas de la vida. No hay cómo evadirse, la educación, la cultura, sus creencias estarán también marcadas por los bajos ingresos.

El disfrute del ocio, entretenimiento y diversión ya están igualmente determinados, sin tiempo para pensar en el rol que desempeñan en la sociedad y cómo liberarse, sólo se dejará llevar como una hoja en medio de un océano. Vive para trabajar; si no trabaja, no come ni él ni los suyos, y casi

siempre sueña en un golpe de suerte que

lo saque de la pobreza; pero ésta no se va, ni siquiera se ahuyenta, por más que se empeñe en

el empleo, por más que trabaje más horas o que pruebe

suerte como

migrante en Estados Unidos, o caiga en los brazos del crimen organizado. El problema estará siempre ahí porque sus bajos ingresos no cambiarán por bondad divina; a menos que un día ya no sueñe y decida cambiar las reglas del juego.

Hasta entonces. **b**





DANTE MONTAÑA

✕ @dantembrito1

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Maestrando en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

COLUMNA | POLÍTICA

Agua limpia y para todos, un privilegio de clase

El domingo pasado, miles de personas salieron a las calles de Guadalajara para exigir algo tan elemental como agua limpia. Llevan meses recibiendo en sus hogares agua cada vez más que turbia, de mal olor y cuya calidad ha despertado serias preocupaciones. La respuesta del gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus, incluyó un pésimo operativo policial que terminó en represión violenta y decenas de detenidos. Sin embargo, sería un error pensar que esta crisis comienza o termina en Jalisco. En México, millones de familias de colonias populares, periferias urbanas y comunidades rurales llevan décadas viviendo entre tandeos, pipas, cortes recurrentes y agua de mala calidad. Pero si el acceso al agua es un derecho universal, ¿por qué disponer de ella “limpia, suficiente y todos los días” depende todavía del lugar donde vivimos y de cuánto dinero tenemos?

El verdadero problema es que, en México, la crisis del agua tiene una larga historia de desigualdad que hemos normalizado. Mientras su escasez en las grandes ciudades provoca preocupación pública y ocupa titulares de periódicos y noticieros, en las colonias populares, periferias urbanas y pueblos campesinos, millones de personas llevan décadas padeciendo este problema en silencio. Ahí, depender de pipas, recibir agua por tandeo o pasar días enteros sin una gota en la llave forman parte de la vida cotidiana. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2024 apenas el 53.4 por ciento de la población contaba con suministro diario de agua en su vivienda. Es decir, para millones de mexicanos, la crisis no es una situación extraordinaria ni reciente, sino una condición permanente de vida que históricamente ha recibido poca o nula atención de los gobiernos de todos los partidos.

Pero esta desigualdad no es casual. El acceso al agua es profundamente político. Dónde se construye infraestructura, cuánto se invierte en mantenerla y qué sectores de la población reciben atención prioritaria. Mientras algunas zonas cuentan con mejores redes de abastecimiento y servicios, en otras ni siquiera está garantizado que el agua llegue con regularidad y con calidad. Además, cuando el suministro falla, las consecuencias tampoco son iguales, pues quienes tienen recursos económicos, pueden encontrar alternativas, mientras las familias más pobres deben resolver como puedan. En un país con profundas desigualdades económicas, recibir agua limpia, suficiente y todos

los días, más que un derecho garantizado, es un privilegio de clase.

Pero esta desigualdad no es producto de la casualidad, proviene de decisiones políticas concretas. El Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional comparten una responsabilidad histórica, pero tampoco la llegada de Morena y MC ha conseguido revertir este problema. Y lo ocurrido en Guadalajara exhibe las contradicciones de esta supuesta “nueva política”; a saber: un gobierno que no logra garantizar agua limpia, pero que paradójicamente reprime la protesta social con chorros de agua a presión. Porque cambiar de colores, renovar rostros y hacer campañas electorales “fosfo fosfo” o con canciones “pegajosas” no hace a un gobierno diferente. La verdadera transformación no se mide en discursos, eslóganes ni estrategias de mercadotecnia, sino en las condiciones materiales de vida de la gente.

Frente a este panorama, resulta necesario recuperar el papel de la organización popular, porque las necesidades de las colonias pobres, las periferias urbanas y los pueblos campesinos no deben ser ignoradas hasta que los problemas alcancen a los sectores más acomodados. Hace falta que las colonias, los barrios y los pueblos nos organicemos para convertir una necesidad cotidiana en una exigencia colectiva capaz de demandar soluciones reales y vigilar su cumplimiento. Después de todo, se trata de un recurso indispensable para la vida, no de una mercancía cuya disponibilidad deba quedar subordinada a las desigualdades económicas. Es decir, lo que hoy funciona como privilegio de unos, debe convertirse en un derecho efectivo para todos. **b**



Canal 6Tv

La visión de nuestra gente



Escanea y síguenos



canal6tv.com



SAMIRA SÁNCHEZ

✕ @samirasanchez20

Maestra en Estudios Urbanos por El Colegio de México. Realiza estudios de doctorado en la misma institución. Sus líneas de investigación son mercado laboral, desigualdad económica y política pública.

COLUMNA | ECONOMÍA

Gravar la riqueza en un país desigual

La constante en la historia fiscal mexicana ha sido la baja recaudación tributaria y su regresividad; esto se traduce en una debilidad histórica de la hacienda pública. Esta debilidad se refleja en todo el sistema impositivo, pero con especial agudeza en el impuesto predial, uno de los instrumentos fiscales más importantes para las arcas municipales. Su recaudación es alarmantemente baja: a nivel nacional apenas alcanza el 0.2 por ciento del PIB. La diferencia con países ricos como Inglaterra es abismal, pues allí se recauda el 3.7 por ciento; pero también resulta menor en comparación con países con niveles de desarrollo económico similares a México, como Chile, donde la cifra llega al 0.78 por ciento, cuatro veces más.

El impuesto predial se cobra con base en el valor catastral que los gobiernos municipales imputan a los inmuebles, y éste a su vez se compone del valor del suelo y los materiales de construcción. En semanas recientes, la cámara de diputados aprobó la Ley de Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que se propone actualizar el registro catastral de todos los municipios mexicanos. Los diputados de los partidos opositores han llamado *predialazo* a esta Ley; pretenden con ello alarmar a la población (propietarios) sobre el aumento de impuestos, lo que iría en contra de la promesa que la 4T ha hecho de no incrementar la carga fiscal.

Vale la pena considerar que actualizar el catastro de los municipios es muy caro y poco rentable electoralmente, por lo que los gobiernos municipales prefieren no hacerlo, mucho menos considerando que su gestión se reduce a un espacio de tres años. Con esta Ley, la actualización catastral quedará en manos del Gobierno Federal, particularmente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Es decir, los gobiernos municipales no podrán asignar el valor catastral, ellos no tendrán esas facultades.

El impuesto predial es, idealmente, el impuesto más progresivo porque grava la propiedad, la riqueza en *stock*, aspecto en el que las sociedades capitalistas son más desiguales que, por ejemplo, la distribución del ingreso. De acuerdo con informes de Oxfam, en México el 10 por ciento de la población más rica tiene 75 por ciento de la riqueza nacional, que abarca el ingreso y las propiedades. El impuesto predial debería servir para gravar las propiedades e invertir ese dinero en

las zonas donde viven las familias pobres y con ello cerrar la brecha de riqueza.

Sin embargo, por la forma en que se implementa actualmente, el impuesto predial es altamente regresivo. Las familias ricas destinan menos porcentaje de su ingreso a pagar el impuesto predial que las familias pobres. Además, la proporción del predial en relación con el valor inmobiliario es más pequeño en las viviendas de familias ricas que en las familias pobres. Es por eso que urge la actualización del valor catastral y registral de los inmuebles. Necesariamente, eso implica el aumento del impuesto predial, aunque el Gobierno Federal lo niegue para no perder votos.

No obstante, esta actualización no garantiza por sí misma la progresividad del impuesto. Incluso es muy probable que el impuesto predial de asentamientos de familias pobres aumente, ya que para su cobro no se toman en cuenta factores económicos o sociales del propietario. Por tanto, ninguna ley, sin la defensa de los pueblos por sus derechos a habitar la ciudad, beneficiará automáticamente a la población, aun cuando sea necesaria para un Estado con más oportunidades.

Pero la progresividad del sistema fiscal no termina en la recaudación, se debe completar con el gasto del gobierno. Si bien se espera que la actualización del valor catastral incremente los ingresos municipales, para que éstos contribuyan a reducir las desigualdades resulta indispensable que la ciudadanía exija su inversión en bienes y servicios básicos: escuelas, alumbrado, hospitales de todos los niveles, banquetas y calles seguras. Sólo así se podrá terminar con otras problemáticas como la segregación residencial, la gentrificación, la financiarización y la especulación de nuestras ciudades, pues estos problemas surgen de que la gente no controla, mediante la organización y la lucha, las renovaciones urbanas que, a la postre, terminan expulsando a la población más pobre. **b**





Clase y lucha de clases

El proceso histórico es, ante todo, lucha de clases. La lucha de clases constituye, por decirlo así, la ley de leyes del desarrollo de la humanidad: es el principal resorte del desarrollo de las formas sociales. De ahí que resulte imposible analizar un fenómeno sin realizar una caracterización *de clase* del mismo y que el punto de partida de todo análisis deba ser la definición *de clase* de un fenómeno dado.

Pero ¿qué es, entonces, una clase social? ¿La conciencia de clase es o no un elemento necesario para su definición?

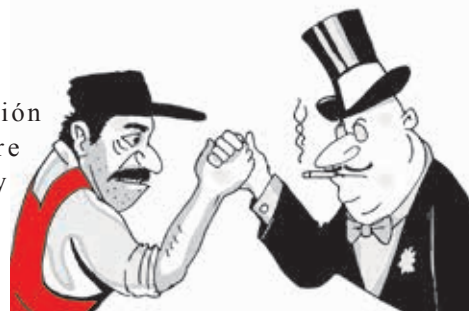
Se suele afirmar que no basta con especificar el lugar que ocupa un grupo social en la estructura económica para poder hablar de “clase social”, sino que, por el contrario, es preciso considerar también la intervención de factores ideológicos y políticos en el proceso de conformación de una clase, pues una clase autónoma no existe históricamente más que en la medida en que desarrolla una práctica específica de clase que corresponde a sus intereses objetivos.

El término “clase” comporta, desde luego, una doble significación. En un sentido, el concepto de clase aparece como la “personificación” de las categorías económicas centrales de un determinado régimen de producción. El primer nivel en que se sitúa el concepto es, pues, el análisis del modo de producción. Desde este punto de vista, las clases son efectos específicos de determinados modos de producción, de donde resulta que tienen una existencia objetiva, incluso antes de que los agentes sociales tomen conciencia de su posición estructural.

En este primer nivel, el económico, las clases se generan y adquieren existencia *objetiva* en la matriz económica de ciertos modos de producción; son efectos de determinada estructura económica sobre los agentes sociales de la producción, a quienes constituyen precisamente como clases.

Pero, en otro sentido, el concepto de “clase” refiere a un grupo social constituido por la conciencia de su situación en el conjunto social y por su práctica política. Hace referencia, por tanto, a la relación dialéctica entre las clases como efectos de determinada estructura económica y las clases como verdaderos sujetos históricos que devienen tales a través de la lucha de clases; es decir, como agentes históricos concretos, capaces de actuar sobre las estructuras y transformarlas. La conciencia de clase aparece aquí como un elemento decisivo para la existencia histórica de la clase social. Es en este segundo nivel del análisis, el político, donde se integra el concepto de conciencia de clase.

La distinción clásica entre clase “en sí” y clase “para sí” no pretende indicar una sucesión cro-



nológica, como si primero existieran las clases y la lucha entre ellas apareciera después; esto es, como si primero existiera la clase en cuanto tal y sólo después la clase consciente de su particularidad. El concepto de clase definido en términos puramente económicos, a partir de la ubicación de un grupo social en el conjunto de las relaciones de producción, presupone, en cambio, que la clase es algo que existe de por sí, con independencia de las luchas que lleva a cabo.

Desde el punto de vista de una concepción “reformista” o economista de las clases sociales, éstas existen antes de la lucha de clases. Como señala Louis Althusser, “es como si se creyera que se puede comprender un partido de fútbol ‘analizando’ la composición de los equipos, sin analizar su enfrentamiento”. Desde esta perspectiva, los contrarios serían anteriores a la contradicción y las clases sociales tendrían una existencia previa e independiente de la lucha de clases. La distinción entre clase “en sí” y clase “para sí” indicaría entonces la existencia previa de una clase social que más tarde adquiriría conciencia de su particularidad.

Cabe sostener, sin embargo, cuando menos para el modo de producción capitalista, el principio del primado de la contradicción sobre los contrarios, es decir, de la lucha de clases sobre las clases mismas y, en consecuencia, del antagonismo de clase sobre la consideración aislada de las clases. De lo contrario, se incurriría en el error de analizar, por un lado, a la clase burguesa y, por el otro, a la clase obrera, como si ambas pudieran comprenderse al margen de la lucha de clases que las constituye precisamente al dividir las en clases antagónicas.

Desde esta perspectiva, no es posible separar las clases de la lucha de clases: se trata de captar a la vez los dos términos del antagonismo para comprender el antagonismo mismo como aquello que constituye a ambos. La lucha de clases sería, pues, el concepto clave para comprender las clases sociales: en otras palabras, las clases sólo existen a través de la lucha de clases. **b**



ALEXIS HERAS

@XlexHeras

Ingeniero en Sistemas Computacionales por la Universidad Politécnica de Chimalhuacán.

El software privativo se verá superado

La industria del *software* construyó, durante décadas, un cerco digital. Grandes empresas desarrollan sistemas operativos, *suites* de diseño y bases de datos; pero no publican su código-fuente y cobran rentas periódicas por utilizarlos. Este modelo es denominado *software* privativo. Su opuesto es el *software* libre o de código abierto, aunque no son exactamente lo mismo: el *software* libre enfatiza las libertades del usuario, mientras que el código abierto pondera el acceso al código-fuente y los beneficios prácticos. Ambos permiten ver, modificar y redistribuir el código bajo ciertas condiciones. La diferencia no es sólo técnica, también es legal y económica.

El *software* privativo se sustenta en derechos de autor, patentes, contratos y secretos comerciales. Esto permitió financiar innovación; pero también creó monopolios y barreras artificiales. Hoy, la Inteligencia Artificial (IA) generativa está tensando ese modelo. La IA es un sistema que se perfecciona con grandes cantidades de datos, textos, imágenes, código y documentación. Incorpora patrones y produce contenido nuevo; ayuda a escribir fragmentos de código, explicar sistemas existentes o seleccionar arquitecturas.

Un ejemplo reciente y contundente es *WordCraft*, una reimplementación limpia de *Microsoft Word* desarrollada por el equipo de *ArtCraft*, liderado por el desarrollador Brandon Thomas, con asistencia de IA. No se trató de copiar códigos, sino de una reimplementación limpia, usar la IA para entender la funcionalidad y escribir un nuevo código desde cero, en lenguajes modernos como *Rust*, que hace lo mismo, pero sin licencias de suscripción obligatorias. *WordCraft* aún está en desarrollo y no cubre todavía todas las funciones de *Microsoft Word*, sólo es una demostración de lo que la IA puede perfeccionar, no un sustituto completo. El mismo equipo también desarrolló *GridCraft*, una alternativa a *Excel*, y *DeckCraft*, una alternativa a *PowerPoint*.

Aquí aparece la contradicción principal. La IA permite reimplementar el *software* con mucho menos esfuerzo porque impulsa la capacidad técnica hacia la abundancia. Sin embargo, las leyes de propiedad intelectual mantienen el *software* como una mercancía escasa, restringiendo su copia y modificación.

Es importante entender que el *copyright* protege la forma concreta del código, no la idea. Por eso, reimplementar



una funcionalidad no viola automáticamente el *copyright*, aunque pueda infringir patentes, contratos o secretos comerciales, según el caso. La reimplementación limpia es una práctica legítima, pero no basta con usar IA; si el modelo fue acondicionado con código propietario, pueden existir riesgos legales aún no resueltos. Ante esto, las grandes empresas reaccionan con dos estrategias claras.

La primera es controlar la infraestructura. Como no pueden impedir del todo que alguien reimplemente una función, desplazan el cerco hacia lo que sí pueden controlar: los datos masivos, los centros de cómputo, los modelos propietarios y las plataformas en la nube. El poder ya no está sólo en poseer el *software*, sino en controlar los servidores y la infraestructura por la que pasa la IA.

La segunda estrategia consiste en endurecer las leyes de propiedad intelectual. Se promueven demandas y regulaciones más estrictas para frenar legalmente lo que la técnica ya volvió más fácil: recrear o democratizar herramientas comerciales. Copiar un archivo digital cuesta casi nada; pero generar servidores, datos y supervisión humana con IA requiere electricidad. Por eso, el control del cómputo se conserva como la principal fuente de poder.

La IA no elimina por sí sola el *software* privativo ni garantiza automáticamente una sociedad más justa; sino que introduce una disputa. El verdadero debate no radica en que la IA pueda o no imitar *software*. La cuestión reside en quién posee los modelos, quién controla los datos y quién se beneficia del conocimiento colectivo. El saber acumulado por millones de programadores se ha incorporado a estas máquinas, que se convirtieron en una fuerza productiva automatizada; es decir, trabajo humano acumulado que ahora actúa a través de máquinas. Si el conocimiento de toda la sociedad es la base de estos modelos, tiene sentido preguntar si sus resultados deberían ser un bien común al servicio del desarrollo colectivo.

La solución no está en proteger modelos de negocio obsoletos con leyes más represivas, está en decidir cómo se reparten las herramientas que automatizan la creación del futuro digital. Porque el conocimiento que hizo posible la IA no fue generado por una sola empresa: lo produjo la humanidad entera. Y lo que pertenece a todos, no debería terminar cercado en beneficio de unos cuantos. **b**



El deporte en México: diagnósticos ambiciosos, soluciones incompletas

El Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2026-2030, proyecto elaborado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) como documento rector de la política deportiva mexicana, reconoce deficiencias, identifica problemas y propone rutas de acción para mejorar la práctica deportiva. Plantea fortalecer la coordinación institucional, impulsar el alto rendimiento, ampliar la activación física y generar oportunidades para la población; sin embargo, detrás de sus objetivos destaca una contradicción fundamental: se pretende transformar el deporte nacional sin asegurar las condiciones materiales necesarias para lograrlo. El documento identifica la ineficiencia del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) como principal obstáculo para lograr resultados; sin embargo, reducir el problema del deporte mexicano a una cuestión de organización administrativa significa quedarse en la superficie. Es cierto que la coordinación entre instituciones debe mejorar, que las responsabilidades necesitan definirse claramente y que los recursos públicos deben ejercerse con transparencia; pero ése no es el eje del problema.

Un sistema puede perfeccionar sus mecanismos de coordinación, establecer indicadores y diseñar estrategias; pero sus posibilidades de transformación permanecerán limitadas si no tiene los medios para ejecutarlas; la planeación es indispensable, pero no construye instalaciones ni garantiza entrenadores capacitados ni permite sostener procesos deportivos por sí sola.

El programa establece que las acciones están sujetas a los recursos aprobados anualmente; de este modo, las metas quedan condicionadas por decisiones presupuestales posteriores. La Conade sufrió recortes presupuestales en los últimos años; en 2026 se reportó una disminución del presupuesto total de la institución respecto al año anterior por más de 73.8 millones de pesos. Por tanto, el problema es económico y político, no existe un programa de financiamiento del Estado, todo queda en buenas intenciones.

Desde una perspectiva política, esta contradicción refleja la manera en que el deporte es concebido en la sociedad capitalista. Las actividades generadoras de ganancias suelen atraer inversiones, patrocinios y atención mediática; aquellas cuyos beneficios son principalmente colectivos, son relevadas a segundo plano.

El deporte profesional puede convertirse en un negocio rentable mediante los derechos de transmisión, la publicidad, los patrocinios y la comercialización de espectáculos. El deporte popular, en cambio, genera beneficios principalmente sociales que no siempre se traducen en ganancias

privadas inmediatas: contribuye a la salud, fortalece la convivencia comunitaria, refuerza el desarrollo de las infancias y amplía las oportunidades de participación social.

¿Quién obtiene ganancias directas cuando una colonia marginada posee una cancha, un entrenador y actividades deportivas gratuitas? Estos beneficios sociales no representan, por sí mismos, una oportunidad de negocio atractiva para el capital privado; por ello, dejar el desarrollo deportivo exclusivamente en manos de la lógica del mercado profundiza las desigualdades: quienes tienen recursos pueden pagar clubes, instalaciones y formación especializada; mientras quienes carecen de ello dependen considerablemente de las oportunidades ofrecidas por las instituciones públicas.

Esta diferencia también obliga a cuestionar la visión actual del deporte centrada en las medallas y los resultados internacionales. Aspirar a mejores posiciones competitivas es legítimo, pero no puede ser el único criterio para evaluar una política deportiva; antes de exigir campeones, es necesario crear condiciones para que niños, jóvenes y adultos practiquen deporte en sus escuelas, barrios y comunidades.

El desafío consiste en entender el deporte como un derecho y responsabilidad pública, no como un privilegio ni como un espectáculo exclusivo. Esto requiere infraestructura accesible, programas comunitarios permanentes, formación de entrenadores, atención a las desigualdades territoriales y mecanismos claros para evaluar los resultados de las políticas implementadas.

Por ello, el debate sobre el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2026-2030 debe ir más allá de la eficiencia del Sinade; también debe examinar si las prioridades gubernamentales corresponden con las necesidades sociales reconocidas en el propio documento y si existen compromisos concretos para convertir sus objetivos en oportunidades reales.

El deporte mexicano no requiere únicamente mejores diagnósticos, necesita una política pública que coloque el bienestar colectivo por encima de la rentabilidad económica. Mientras la práctica deportiva dependa de la capacidad para invertir de las personas, o de la disponibilidad irregular de apoyos públicos, plantear una cultura deportiva nacional permanecerá como una aspiración incompleta.

El valor legítimo de una política deportiva no radica en la cantidad de metas difundidas, sino en las posibilidades accesibles para su población. Un Estado que aspira a transformar su nivel deportivo deberá garantizar que su pueblo tenga la oportunidad de practicarlo. **b**



JENNY ACOSTA

✉ @acostajenvic

Maestra en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus principales líneas de investigación son filosofía política, marxismo, feminismo y estética.

¿Materialismo o idealismo?

Cuando se comienza el estudio de la filosofía es normal encontrarse con el debate entre materialistas e idealistas.

La diferencia entre materialistas e idealistas suele establecerse según la respuesta que den a la pregunta de qué es lo primordial en el conocimiento, si la estructura subjetiva o la objetiva, es decir, si el sujeto o el objeto. Por sujeto tiende a entenderse a la persona que conoce, mientras que el objeto es aquello que está conociéndose. Esta cuestión primaria puede presentarse de distintas maneras, dependiendo del autor o del problema que se analice, sin embargo, es relativamente fácil identificar qué lado presentaría al materialismo y cuál al idealismo. Quienes clasifican a la historia de la filosofía en estos términos también suelen indicar quiénes son los filósofos materialistas y quienes los idealistas. Por ejemplo, a Platón, David Hume, Immanuel Kant o Georg W. Hegel, se les denomina idealistas; mientras que, a Aristóteles, John Locke, Denis Diderot o Carlos Marx, materialistas.

Esta separación pretendidamente clara entre una corriente y otra tiene cierto sostén en los debates que se entablaron durante lo que se conoció como El Siglo de las Luces por quienes buscaban conformar un conocimiento experimental y comprobable del mundo sensible, pues las explicaciones teológicas de los fenómenos no les eran satisfactorias. O también se pueden considerar los debates entre John Locke y David Hume sobre el origen de los conocimientos humanos: Locke defendía que el conocimiento se construye a través de la experiencia, mientras que Hume argüía la necesidad de estructuras innatas que nos ayudarían a ordenar nuestras sensaciones del mundo. Sin embargo, a pesar de que en ciertos momentos del desarrollo filosófico el debate se ha agudizado sobre este punto, mostrando claras diferencias entre unos y otros, estos momentos no pueden

absolutizarse a riesgo de caer en contradicciones flagrantes en la interpretación de determinado pensamiento filosófico.

Considérese como ejemplo la siguiente cita: “el idealismo, que considera al sujeto, lo activo de la contraposición, como un mero miembro de la misma contraposición, y como existente pretende liberarlo sin embargo de la determinidad y de la exterioridad, es un idealismo enteramente ridículo”. En ella se expresa claramente una fuerte crítica a quienes pretenden encontrar un sujeto que pueda conocer con independencia de las condiciones exteriores que determinan su existencia específica. Si quien me lee tiene cierta familiaridad con el debate entre materialistas e idealistas, seguramente atribuirá este fragmento a alguno de los pensadores que típicamente se consideran materialistas. Si éste es el caso, le resultaría entonces sorprendente saber que la cita en cuestión proviene de un texto de Hegel, a quien esta forma de entender la filosofía suele considerar como uno de los principales idealistas.

Ciertamente, aplicar el adjetivo de idealista a Hegel no es fortuito, él mismo se reconoce como tal. Lo que quiero mostrar con la anterior cita no es el no idealismo de Hegel, sino invitar a reflexionar sobre qué quiere decir ser idealista o materialista, pero, sobre todo, a considerar los errores a que puede conducir el tener una posición maniqueísta de la filosofía y del mundo en general. Así como la valoración de Hegel como idealista debe, para ser precisa, ser capaz de explicar estos posicionamientos suyos que lo acercan a los materialistas casi al punto de mezclarse uniformemente con ellos, así también sucede con toda la historia de la filosofía, según las particularidades de cada propuesta filosófica. Sin embargo, una valoración de esta naturaleza sólo puede construirse a través de un estudio serio pues, de otro modo, sólo se podrán hacer repeticiones vacías de consignas moribundas. **▮**





Dos mujeres

Ciociara (*Dos mujeres*) es la obra escrita por Alberto Moravia en 1957, novela en la que se basó el filme de Vittorio De Sica en 1960; ambas narraciones, la literaria y la cinematográfica, son dos claras expresiones del Neorrealismo. Pero este realismo en el caso de Moravia y de De Sica no tenía el objetivo de presentarnos la realidad de la sociedad europea de esa época solamente “tal y como era”, buscaba formar un vínculo para criticar a esa sociedad que, imitando a Estados Unidos, reflejaba a una sociedad hedonista, despilfarradora, injusta y acomodaticia.

El filme *Dos mujeres*, de Vittorio De Sica, narra la cruel realidad que viven una madre y su hija en 1943, cuando el fascismo italiano —aliado del fascismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial— está retrocediendo, deciden abandonar Roma ante el peligro de los constantes bombardeos sobre la capital italiana; Cesira (Sophia Loren) convence a su hija Rosetta (Eleonora Brown), una adolescente de trece años, de trasladarse al pueblo natal de la primera: un lugar lejano, pero que Cesira considera más apacible y menos peligroso que la gran ciudad.

Para llegar a Santa Eugenia deben hacer parte del viaje a pie; en alguna parte de ese recorrido notan que la guerra está por todas partes, pues unos segundos después de saludar a las mujeres, un campesino que pasa junto a ellas es acribillado por las ráfagas de metralla de un avión alemán; ellas se salvan. Llegan a Santa Eugenia y pronto, a pesar de la amabilidad de los habitantes de ese pequeño poblado, la vida resulta más dura que en Roma; el peligro merodea igual que en la capital.

En Santa Eugenia vive un joven profesionista que estudió Letras; Michelle (Jean Paul Belmondo) es un personaje que encarna la ilustración en esa pequeña sociedad campesina; Michelle intenta elevar el nivel intelectual de los habitantes leyendo obras importantes, pero sus intentos son infructuosos. Cuando conoce a Cesira, se enamora de ella y la corteja; Cesira y Rosetta se percatan de que en Santa Eugenia hay poco alimento y, lo peor: en su retirada, los alemanes que dejan sus posiciones en Italia cuando se acerca la derrota, pasan por las pequeñas poblaciones y obligan a los habitantes a que los aprovisionen.

Cuando los alemanes llegan a Santa Eugenia, obligan a Michelle a acompañarlos en su retirada a las montañas. Nunca lo volverán a ver ni sus familiares ni Cesira o Rosetta. Ante la hambruna que se cierne sobre la población y los peligros que

entraña quedarse en aquel lugar, las dos mujeres deciden regresar a Roma; en su camino ven pasar las columnas de soldados gringos, británicos y otros ejércitos aliados. Un pelotón de soldados turcos —también aliados— pasa por un camino polvoso, pero no le dan importancia; poco más adelante, madre e hija deciden pernoctar en una derruida iglesia; ahí, de forma brutal y tumultuaria, son violadas por los soldados turcos. Aún lastimadas, deciden continuar con su regreso; un joven conductor de camión les ofrece llevarlas; después de aceptar la invitación de este joven para asistir a un baile, Rosetta es recriminada por su madre: cuando ella le informa que Michelle murió, la adolescente llora inconsolable.

Es muy significativa la escena en la que después de la violación, Cesira camina en la carretera, detiene el vehículo de un oficial británico y le exige que castigue a los violadores; pero a este oficial no le importa lo sucedido a las dos mujeres. Sin duda, este crudo realismo ofrece la clave de la historia: una visión opuesta a la que presenta a los aliados como “salvadores” cuando permitían y efectuaban ellos mismos los abusos propios de los conquistadores. Esta historia filmica de Vittorio De Sica intenta desmitificar la visión sobre las fuerzas que “liberaron” a Italia, compuestas por las canallescas tropas imperialistas, dispuestas a ejercer su dominio de forma brutal, nada lejos de las atrocidades nazis. **▮**



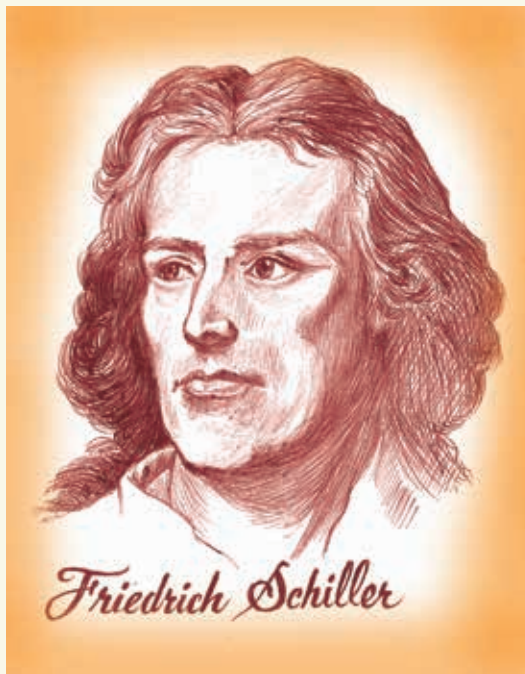


Guillermo Tell, de Friedrich Schiller

Obra de teatro fascinante, escrita por Schiller en 1803 y representada un año después, logrando un éxito inmediato. Ha sido inspiración de medio mundo y, en el arte musical, de la última ópera de Rossini. Más que sólo la trillada historia de la flecha que peligrosamente perfora la manzana sobre la cabeza del hijo de Guillermo Tell, luego de que éste la lanzara a 80 pasos de distancia, la obra cuenta la historia de todo un pueblo que lucha por su libertad contra el opresor extranjero, conquistada con una violencia que acepta claramente el adjetivo de revolucionaria, al menos para su época.

Es una de las grandes obras del romanticismo alemán que sin duda necesita leer o ver representada la juventud de cualquier nación, incluido México, como parte de nuestra sana alimentación literaria. Los personajes son tanto los señores feudales de la Suiza del Siglo XIV como sus vasallos, ambos oprimidos por el dominio extranjero. Las dos clases sociales, con sus diferentes estratos, todos ellos de las diferentes regiones que componían la Suiza confederada de entonces, se unen para luchar contra el tirano Geszler, lugarteniente del imperio austriaco. “Permaneced unidos estrechamente y para siempre. Que ninguna comarca se mantenga indiferente a la libertad de otra comarca; velad desde la cima de estos montes, para que los confederados acudan presurosos a defender a los confederados. Permaneced unidos..., unidos..., unidos...”, dice en su agonía a los suyos el barón de Attinghausen, padre de Ulrico de Rudenz, quien de manera sorprendente cambia de ser casi un traidor a terminar, arrepenido, dando la libertad ¡a sus vasallos!

Es inevitable relacionar la tiranía de Geszler, sus decisiones profundamente injustas y humillantes contra los personajes de esta obra, su desprecio por la vida, la integridad y la seguridad de vasallos y sus dueños suizos, los saqueos y robos de casas, ganado y propiedades que comete, su odio, crímenes y menosprecio a todo patriota, sus caprichos (como exigir que todo suizo se hinque ante su sombrero), sus abusos militares y todo lo que conduce al pueblo alpino a la justificada rebelión, relacionarla, decía, con la conducta del sionismo y del fascismo que hoy



hacen exactamente lo mismo, pero a escala mayor, en Gaza y Ucrania, desde donde agreden a palestinos y rusos.

En esta obra incomparable de Schiller encontramos ejemplos sublimes de nobleza de sentimientos, de ayuda al desvalido y respeto a la palabra empeñada (como cuando el cazador Tell ayuda, a través de un lago bajo fiera tormenta, a huir a Baumgarten de la persecución del régimen; o cuando se apiada del joven príncipe de Suabia, asesino de su tío y que llega huyendo a casa de Tell a pedir ayuda y éste no se la niega); modelos de conducta como la firme decisión de todos los personajes de permanecer fieles a su patria, de defenderla sin

importar ningún sacrificio, la voluntad de ofrecer la vida por la libertad de su pueblo; como la conciencia patriótica de Gertudis, mujer de Stauffacher, cuando lo exhorta a encabezar conspiraciones para la rebelión a riesgo de perder todas sus posesiones; o la de Berta, austriaca oprimida por sus compatriotas, que reprocha a Rudenz, su enamorado, la traición que está a punto de cometer contra su propio pueblo, mujer extranjera que termina enamorada de las ansias libertarias del pueblo suizo; o la de la valiente madre que con sus hijos hace frente al caballo de Geszler para exigirle que libere a su esposo, injustamente encarcelado.

Más que sólo de Guillermo Tell, Schiller presenta la gesta heroica de todo un pueblo que se organiza para liberarse y resistir la dominación extranjera. Es emocionante ver cómo se van organizando y poniendo de acuerdo, aún sin la presencia del valiente cazador; cómo deciden, en la oscuridad de la noche, junto a los bosques de Rutli, a la luz de sus antorchas, dejar a un lado sus desavenencias particulares en pro del bien colectivo y así, en asamblea popular, deciden tomar las armas.

Nada que ver con la flacidez política de la clase gobernante actual de Suiza, supuestamente neutral en los conflictos intereuropeos, que ha declarado que tendrá una neutralidad “flexible”, es decir, sin eufemismos, apoyará a la OTAN en caso de que le declare la guerra a Rusia. Seguramente Guillermo Tell y todos sus compañeros ya piensan regresar del más allá, ballesta en mano, a flechar tan infame flexibilidad. **b**



Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero

Publicada en el poemario *El rayo que no cesa* (1936), semanas antes de que estallara la Guerra Civil Española, la *Elegía a Ramón Sijé* es un desgarrador canto fúnebre en el que el gran poeta revolucionario Miguel Hernández (1910-1942) expresa el duelo por la muerte de su amigo y coterráneo. “En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería”, es el epígrafe de la que ha sido considerada una de las elegías más perfectas en nuestro idioma. Escrita en tercetos encadenados, propios de la poesía clásica española, la maestría de su construcción, el empleo preciso de recursos poéticos, la perfección de cada verso y la singularísima rima no son sino el ánfora que contiene un dolor tan personal, tan auténtico por la pérdida, que tocan la universalidad y alcanzan a las almas capaces de sentir un duelo de esa magnitud. ¿Y qué decir del ritmo? No hay estrofa ni verso que puedan cambiar de sitio; el poema posee una insuperable sintaxis interior para expresar distintos estados de ánimo: dolor asfixiante al recibir la noticia, incredulidad, inconformidad, desesperación, angustia, impotencia, deseos de venganza y de resucitar al objeto de su duelo hasta desembocar en el anhelo de un reencuentro cósmico, caracterizado por un torrente de símbolos que contrasta con el de la primera parte: los hachazos, golpes, heridas, difuntos, dentelladas y mordazas dan paso a rosas, pájaros, colmenas y a los almendros del reencuentro espiritual que el poeta anhela.

Alejados por razones geográficas e ideológicas, la profunda amistad compartida entre Ramón y Miguel trasciende las fronteras temporales y hoy lo publicamos en esta *Tribuna* como un camino a la catarsis que nos permita llorar al camarada que se nos adelanta.

Yo quiero ser llorando el hortelano,
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas

daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.

Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.

Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.

No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.

En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes,
sedienta de catástrofes y hambrienta.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.

Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de mis flores
pajareará tu alma colmenera

de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.

Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irá a cada lado
disputando tu novia y las abejas.

Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.

A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero. **▮**

54 LA POESÍA CHINA DE LA DINASTÍA ZHOU

El **Shijing**, o **Libro de la poesía**, es la antología poética más antigua que se conserva de la literatura china; está compuesto por 305 poemas que datan desde principios de la dinastía Zhou hasta los siglos XI y VII a.n.e.

“A diferencia de la India, con las epopeyas del *Mahabharata* y el *Ramayana*, de Grecia con la poesía homérica del Siglo VIII y de Mesopotamia con el largo *Poema de Gilgamesh*, China nunca produjo poesía épica. La poesía china es lírica desde sus orígenes y en dichos orígenes encontramos poemas tanto de tipo popular como letrado”.

Los poemas que hoy compartimos “nos permiten saber cómo era la vida del pueblo llano de entonces, sino también unos versos de los más hermosos que produjo la humanidad de aquellos tiempos y que, sorprendentemente, llegan con suma facilidad al lector moderno por la forma en que nos hablan de cuestiones, sentimientos e ideas que nos preocupan y afectan, que vivimos y sentimos hoy día, como son el rechazo a la guerra, el descontento con el mal gobierno, la separación de los seres queridos, el amor, el desamor y el deseo, el desaliento ante cómo nos zarandea la vida, el afán por tener auténtica libertad de expresión, la búsqueda de la tranquilidad interior o la invitación a disfrutar de la vida «mientras quede tiempo», como dice un poema que, como muchos otros, recuerda al *carpe diem* romano. Así es. Ha resultado que muchos de estos temas que creíamos «típicamente nuestros», nacidos en nuestra tradición grecolatina, eran también desde hacía muchos siglos (...) entre el mundo chino y el nuestro hay muchas más semejanzas e identidades de las que se pueden percibir a simple vista”. Tomado de *Poesía popular de la China antigua*. Selección, traducción y prólogo de Gabriel García-Noblejas, 2008. **b**

Las avutardas aleteando

Zas, zas, hacen las avutardas aleteando
reunidas entre robles frondosos.
Sigo al servicio del rey
sin poder sembrar miijo ni trigo
mis padres, ¿de qué vivirán?
Cielo azul allá lejos, lejos,
¿cuándo todo estará en su lugar?
Zas, zas, hacen las avutardas revoloteando
reunidas entre azufafos frondosos.
Sigo al servicio del rey
sin poder sembrar miijo ni trigo
mis padres, ¿qué comerán?
Cielo azul allá lejos, lejos,
¿cuándo todo esto terminará?
Zas, zas, hacen las avutardas volando
reunidas entre moreras frondosas.
Sigo al servicio del rey
sin poder sembrar miijo ni trigo
mis padres, ¿cómo vivirán?
Cielo azul allá lejos, lejos,
¿cuándo estará todo como tiene que estar?

Bajo un palo por dintel

Bajo un palo por dintel
se puede vivir en paz
con el agua de una fuente
vivir contento y sin hambre.
Cuando comemos pescado,
¿por qué ha de ser besugo del Río?
Cuando buscamos mujer,
¿por qué ha de ser princesa de Qi?
Cuando comemos pescado,
¿por qué ha de ser carpa del Río?
Cuando buscamos mujer,
¿por qué ha de ser princesa de Song?

Ratas grandes

Ratas grandes, ratas grandes,
no os comáis nuestro miijo.
Señor, tres años que os servimos
y nunca nos habéis considerado;
juro que os dejamos aquí,
partimos a una tierra feliz.
A una tierra feliz, a una tierra feliz
donde tener nuestros hogares.
Ratas grandes, ratas grandes,
no os comáis nuestro trigo.
Señor, tres años que os servimos
y nunca nos habéis remunerado;
juro que os dejamos aquí,
partimos a un Estado feliz.
A un Estado feliz, a un Estado feliz
donde tener nuestros derechos.
Ratas grandes, ratas grandes,
no os comáis nuestros brotes.
Señor, tres años que os servimos
y nunca nos habéis pagado;
juro que os dejamos aquí,
partimos a un campo feliz.
A un campo feliz, a un campo feliz,
¿quién quiere lamentarse sin fin?

En el séptimo mes

En el séptimo mes fluyen las lumbres
y en el noveno se reparte la ropa.
En los días del primero sopla frío el viento
en los del segundo, todo se hiela,
¿cómo vamos a llegar a fin de año
si no tenemos ropas largas ni cortas?
Los días del tercero vamos al arado
los del cuarto levantamos los pies;
mi mujer, mis hijos y yo

llevamos de comer al campo Sur
y al capataz le place.
En el séptimo mes fluyen las lumbres
en el noveno se reparte la ropa.
En primavera los días son templados
y canta la oropéndola;
las muchachas llevan cestas bonitas
por las sendas pequeñas
buscando hojas tiernas de morera.
En primavera los días son más largos
y se va a coger ontinas en tropel;
tristes y apenadas las muchachas
temen partir con su señor casadas.
En el séptimo mes fluyen las lumbres
en el octavo hay juncos y carrizos.
En el mes de los gusanos
podamos las moreras
con las hachas y las hacheras
corramos las altas, las alejadas
y con cuerdas tiramos de las blandas.
En el séptimo mes canta el alcaudón
en el octavo hilamos el cáñamo
se hila negro, se hila amarillo;
resplandecen las telas coloradas
para ropa del señor.
En el cuarto mes dan flor las yao
en el quinto canta la cigarra
en el octavo es la cosecha
en el décimo se caen las hojas.
En los días del primero es la batida
cogemos pieles de zorro y de gato montés
para abrigo del señor.
En los días del segundo
es la batida en grupo
y así continuamos
con las cosas de las armas;

nos guardamos los gorrinos chicos
y los grandes regalamos al señor.
En el quinto mes
mueve el saltamontes las patas
en el sexto se frota las alas la cigarra
y en el séptimo están en los montes
en el octavo en los tejados
en el noveno en las viviendas
en el décimo los grillos
se nos meten bajo las camas;
tapamos huecos,
echamos las ratas con humo
condenamos ventanas, cerramos puertas;
miramos a esposas e hijos
y decimos: «Llega el Año Nuevo
venid y vivamos aquí adentro».
En el sexto mes
comemos ciruelas y cerezas,
en el séptimo guisamos
con malvas y legumbres.
En el octavo vareamos las azufaífas
en el décimo cogemos el arroz
y hacemos el vino de primavera
y nos deseamos larga vida.
En el séptimo comemos melón
en el octavo cortamos calabazas
en el noveno segamos el cáñamo
cortamos el euforbio,
hacemos leña de ailanto
para poder comer
nosotros, los campesinos.
En el noveno mes construimos
y aplanamos el terreno
en el décimo guardamos la cosecha
el sorgo y el mijo tardío o tempranero
el arroz, el cáñamo, la alubia, el maíz.
Oh, campesinos,
nuestra cosecha está entonces terminada
subamos a trabajar en el palacio del señor
a segar hierba de mañana
a trenzar sogas de tarde;
hay que reparar los tejados

y así hasta que viene
el tiempo de la siembra.
En los días del segundo cortamos
el hielo con hacheras
en los del tercero entramos
en las casas de hielo
en los del cuarto madrugamos
para ofrendar corderos y ofrecer cebollas.
En el noveno mes caen las escarchas
en el décimo desbrozamos el campo;
con dos vasijas de vino celebramos
y matamos un cordero lechal
y subimos al salón del señor
y alzamos los cuernos de rinoceronte
y gritamos: ¡Larga vida y salud!

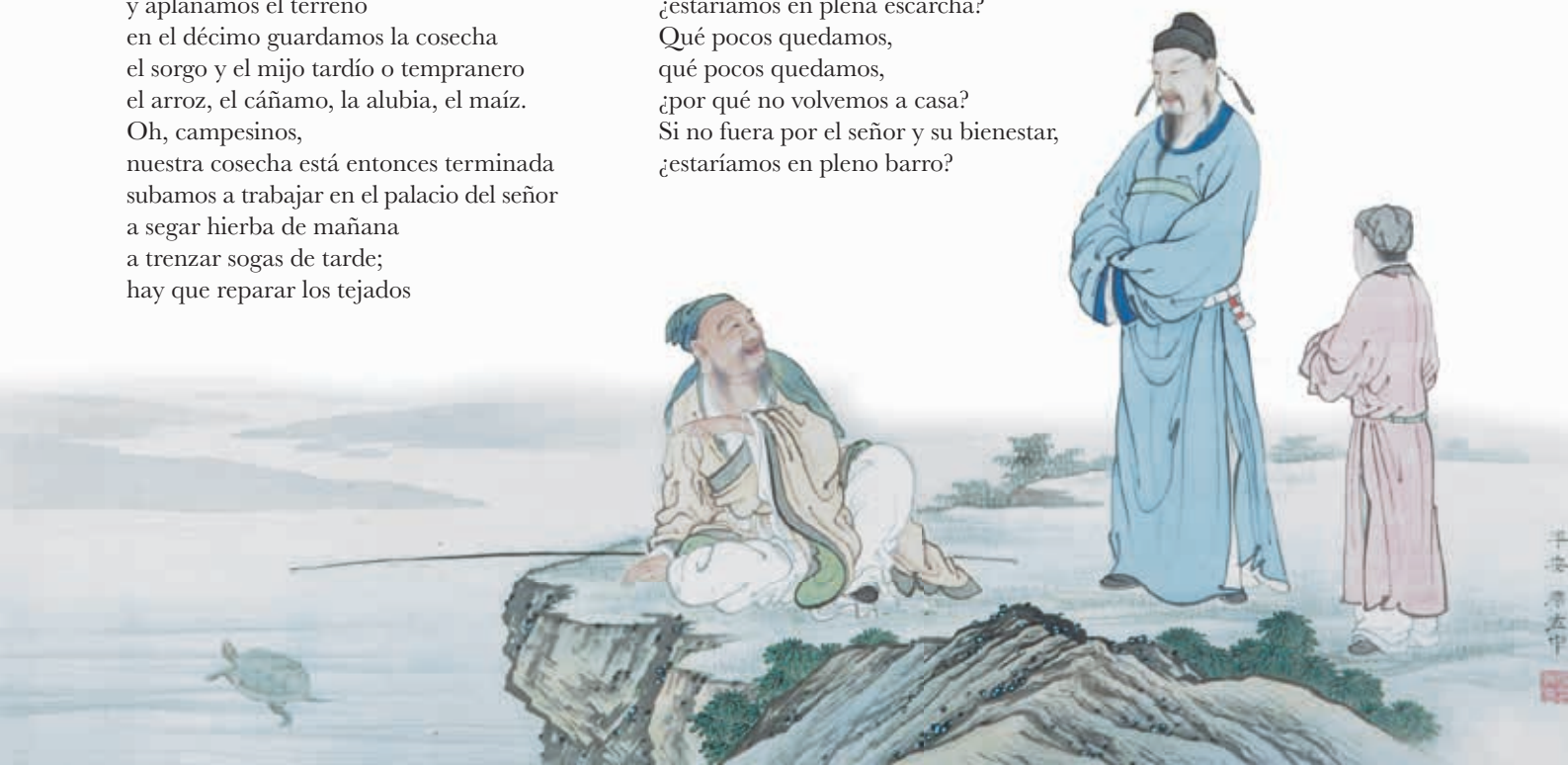
Qué oscuro está

1

Qué oscuro está, qué oscuro está,
¿por qué no volvemos a casa?
Si no fuera por el señor y sus intereses,
¿estaríamos en plena escarcha?
Qué oscuro está, qué oscuro está,
¿por qué no volvemos a casa?
Si no fuera por el señor y su bienestar,
¿estaríamos en pleno barro?

2

Qué pocos quedamos,
qué pocos quedamos,
¿por qué no volvemos a casa?
Si no fuera por el señor y sus intereses,
¿estaríamos en plena escarcha?
Qué pocos quedamos,
qué pocos quedamos,
¿por qué no volvemos a casa?
Si no fuera por el señor y su bienestar,
¿estaríamos en pleno barro?



Sociedad Anónima

X @carlosAMjsoto

E. Mejía®



Nuestros libros cada vez más cerca de ti



completa tu colección en cualquiera
de nuestros puntos de venta:

Ciudad de México

Café Huitzi Balderas
Gral. Gabriel Hernández 32, Doctores,
Alcaldía Cuauhtémoc.

Librería Nuestra América
Juan A. Mateos 32, Obrera,
Alcaldía Cuauhtémoc.

Puebla

Fonda Margarita
Av. 5 Poniente 322, Centro.
Av. 2 Poniente 506, Centro.

**Fonda Margarita
San Francisco**
Calle 6 Norte 803, Centro.

Hotel Margarita

Av. 5 Poniente 914, Centro.

Fonda Margarita San Martín
Carr. Internacional km 60,
San Martín Alchichica,
Izúcar de Matamoros.

Hotel Margarita Acatlán
B. Juárez 6, San Juan, Centro
Acatlán de Osorio.

Morelos

**Fonda Margarita
La Estación**
Carr. Fed. México-Cuautla
km 92.5, Atlatlahucan,
Los Cerritos.

Michoacán

Fonda Margarita Morelia
Manuel Villalongin 25,
Centro, Morelia.

Estado de México

Gasolinera La Paz
Av. Hidalgo Mz. 030, San
Sebastián Chimalpa, La Paz.

Café Huitzi Texcoco
Vicente Guerrero 25, Centro,
Ejido del Centro.

Café Huitzi Chimalhuacán
Arca de Noé s/n, San Miguel
Acuitlapilco.

COROS, RONDALLAS — Y VOCES —

III JORNADA NACIONAL

"Rescatando la música
popular mexicana"

SÁBADO
24 DE OCTUBRE | 10:00 AM

En todos los estados de la República Mexicana



MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL